Mujeres transgénero frente a la definición de situación militar en Bogotá Colombia

Marco Antonio Ruiz Nieves

Tutora: Cecilia Lorena Barraza Morelle

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y

Cortes Internacionales

Universidad Santo Tomas O.P.

Bogotá D.C.

2016

Dedicatoria

Agradezco a Dios y a la Santísima Virgen por su presencia en todo momento de lucha y sacrificio; de igual manera a mis padres quienes, con su apoyo, amor y sabios consejos, me ayudaron a construir mi futuro. De igual manera, agradezco a mi pareja quien me enseñó un mundo de comprensión y cariño libre de prejuicios; a mis amigos Felipe Mantilla, Mauricio Martínez Bustamante, Daniela Alexandra Méndez Gómez y Zarela Álvarez Vergel, quienes creyeron en mí y me enseñaron a ver con alegría las diferencias, sin importar el sexo, el género, la raza o la situación socioeconómica. A mi tutora Cecilia Barraza Morelle por su guía y conocimiento dentro del presente trabajo, y a mi Jack Russel Terrier Locky, quien me acompañó en largas noches de estudio. Por último, a la Universidad Santo Tomás: cuna de mi conocimiento, a mis compañeros de la VII Corte de Maestría en Defensa de los Derechos Humanos para Litigio ante Tribunales y Cortes Internacionales, a la comunidad Trans de Bogotá (Santiago y Lorenza), Organizando Trans Diversidades (OTD) Chile, Trans México (en especial a Bruno Damián), Casa Refugio LGBT (Teusaquillo, Bogotá), al resucitado Blues Bar en memoria de (German) y a Theatrón de Película (Édison Ramírez), por permitirme ver un espacio lleno de diversidad.

Marco Antonio Ruiz Nieves defensor de derechos humanos de quienes han visto sus voces acalladas por los prejuicios y estereotipos, de un modelo heteronormativo que humaniza la discriminación y deshumaniza al ser humano.

Tabla de contenido

Introducción	7
1. Marco teórico	9
1.1 Definición de <i>Transgénero</i>	10
1.2 El género como construcción social	16
1.3 LGBTI y su desarrollo en Colombia: Transgénero como Condición Particular	21
1.4 Mujer Transgénero como integrante del conglomerado LGBTI en el Derecho Colombiano.....	23
1.5 Instrumentos internacionales en materia de protección de las Mujeres Transgénero	25
1.6 Situación de las Mujeres Transgénero en el Mundo.....	32
1.6.1 Transgénero en Latinoamérica (Ley de identidad de Género).....	35
2 Definición del servicio militar en las mujeres transgénero.....	37
2.1 Definición de Servicio Militar en Centro América y Sur América	37
2.2 Servicio Militar en Colombia	40
2.3 Mujer transgénero menor y mayor de 18 años frente a la definición de situación militar	43
2.3.1 Situación de <i>inscrito y remiso</i>	45
2.3.2 Facultad de compeler	48
2.3.3 Etapas de la compelación y situación de las mujeres transgénero en el proceso de definición de situación militar en Colombia.....	49
2.3.4 Avances y retrocesos	50
3. Análisis de la realidad	53

3.1 ¿Hay una violación de derechos humanos en materia de la definición de la situación militar para mujeres transgénero?	53
3.2 La inadecuada interpretación normativa	58
3.3 La Violencia por prejuicio	63
4. Conclusiones y recomendaciones	69
3 Anexos	73
4 Bibliografía	95

Lista de anexos

Anexo 1. Figura 1 – Identidad de Género y orientación sexual, Mujer.....	73
Anexo 2. Figura 2 – Identidad de Género y orientación sexual, Hombre	74
Anexo 3. Figura 3 – Identidades de Género en personas intersexuales.....	75
Anexo 4. Figura 4 – Identidades de Género (<i>Genderqueer</i>).....	76
Anexo 5. Figura 5 – Mujer Transgénero (protección reforzada).....	77
Anexo 6. Fotografía 1 Persona Queer en exigencia de sus derechos (Marcha LGBTI Bogotá 2016).....	78
Anexo 7. Fotografía 2. Personas <i>Queer</i> en exigencia de sus derechos (Marcha LGBTI Bogotá 2016).....	79
Anexo 8. Fotografía 3 Hombre transformación a <i>drag queen</i>	80
Anexo 9. Fotografía 4. Mujer transgénero en la marcha LGBTI Bogotá 2016.....	81
Anexo 10. Fotografía 5 mujeres trans en la marcha LGBTI Bogotá 2016.....	82
Anexo 11. Entrevista a mujeres transgénero frente a la definición de situación militar	83
Anexo 12. Sentencias desarrolladas por Colombia.....	87
Anexo 13. Glosario	92

Resumen

Con el presente estudio se busca mostrar la problemática que enfrentan las mujeres transgénero a la hora de definir su situación militar en Colombia a la luz de los Derechos Humanos, la Constitución Política, la Ley 48 de 1993, y la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional, en concordancia con instrumentos internacionales como la Convención Americana de DDHH y lo establecido por informes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El estudio busca generar una reflexión sobre si las mujeres transgénero son objeto de violación a sus derechos humanos en un proceso del cual solo son receptores los hombres. De igual manera, analizar si es necesaria la creación de una norma específica para personas transgeneristas, que regule la situación militar en Colombia.

Abstract

The present study seeks to make visible the problematic that transgendered women confront in regards to the definition of their military situation in Colombia, in the light of the Human Rights, the national constitution of this country, Law 48 of 1993, and the legal framework developed by the Constitutional Court, in accordance with international instruments such as the Human Rights American Court, and the stated by the ombudsman's informs, as well as the Inter American Commission for Human. The study seeks to generate in the reader a reflection upon if transgendered women are or are not object of human rights' violations, when in a recruiting process of which only men are receptors. It also pretends to analyze the necessity of a regulatory and specific norm for transgendered people, that regulates the military situation in Colombia.

Introducción

El presente estudio tiene por objetivo general determinar la situación actual de las mujeres transgénero en Bogotá - Colombia, frente a la definición de su situación militar, de conformidad con la legislación y jurisprudencia vigente, planteándose los siguientes objetivos específicos:

- Realizar una aproximación conceptual al transgenerismo y al marco de los derechos que le asisten, para así establecer el alcance de la discriminación y posible violación de derechos fundamentales de personas transgeneristas en la definición de su situación militar.
- Analizar la situación actual de las mujeres transgeneristas colombianas al definir su situación militar frente a la institución Ejército Nacional.
- Analizar el contenido normativo y jurisprudencial, para de esta manera ofrecer una recomendación viable, desde el punto de vista jurídico, en caso de discriminación y violación de derechos a las personas transgeneristas.

En la construcción de la identidad del sujeto, la asignación y el reconocimiento de roles y estereotipos sociales está marcada por el género que se le asigna a las personas y determina la forma en que los individuos se relacionan con su entorno. La sociedad espera que el género sea conexo al sexo biológico: si se nace con una fisionomía de mujer, el género esperado es el femenino y, si se nace con fisionomía de hombre, el género esperado es el masculino. En tal sentido, la determinación de algunas personas por transitar al género opuesto implica una problemática social que demanda una nueva reinterpretación conceptual a la luz de las libertades y los derechos humanos y una apuesta social por transformar nuestra cultura.

El Estado colombiano como Estado Social de Derecho, y de conformidad con su Constitución Política vigente, debe velar por la eficaz protección y promoción de los derechos humanos, cumpliendo obligaciones positivas frente a su garantía, como negativas

frente a la abstención de medidas que vayan en perjuicio de la situación que viven las mujeres transgénero generando discriminación, por ejemplo, al verse obligadas a definir su situación militar.

El Estado colombiano, no ha logrado dar aún protección integral a las mujeres transgénero, ya que la discriminación continua en ámbitos públicos y privados, dejando así como resultado la estigmatización y la agresión en razón del género, y en algunos casos, el aislamiento de las personas transgénero.

La normatividad internacional en derechos humanos, en conjunto con el derecho interno, marca las obligaciones y ruta para que los Estados hagan efectivo el deber de respeto a la identidad de género. Al igual que la raza o la religión, deben ser vistas como condiciones constitutivas de la persona, quien no puede ser objeto de distinción, exclusión, o disminución de un derecho.

El presente trabajo pretende realizar un aporte al entendimiento de la situación de las mujeres transgénero, frente a la definición de su situación militar en Colombia, toda vez que, a pesar de existir normas y planteamientos garantistas por parte de la Corte Constitucional que contribuyen a la comprensión de dicha situación, los mismos no son interpretados de manera adecuada por el Ejército. Esta situación tiene por consecuencia el no reconocimiento de los derechos de las mujeres transgénero, sometiéndolas de modo indiferenciado al proceso de definición de su situación militar. Un claro ejemplo, son las mujeres transgénero menores de edad, quienes deben definir su situación militar, sin encontrarse amparadas por el Decreto de Cambio de Sexo 1227 de 2015 (sobre el cambio de sexo en el registro civil).

En un primer capítulo este trabajo aborda los elementos teóricos del transgenerismo y los instrumentos normativos que amparan sus derechos. En el segundo capítulo se revisa la situación militar de las mujeres transgénero.

En el tercer capítulo se analiza la temática desde la situación de derechos humanos y su posible vulneración, una inadecuada interpretación normativa y la violencia a causa del prejuicio. Por último, se finaliza con unas conclusiones y recomendaciones al Estado colombiano.

1. Marco teórico

La legislación colombiana determinó la noción de persona y quien es considerado legalmente como tal, disponiendo en el Código Civil en su artículo 74 la definición y en el artículo 90 la existencia legal de la persona, y lo que para efectos de este trabajo se llamará identificación de la misma en el cuerpo normativo. El legislador en el Código Civil Colombiano, artículo 74, define persona como “todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Ley 57 de 1887, Art. 74). Dicho concepto incluye a las mujeres transgénero quienes, al reunir estas calidades, se hacen acreedora a una serie de derechos de los cuales el Estado es garante.

Las personas transgeneristas en Colombia tienen una doble protección constitucional por ser integrantes de la comunidad LGBTI, la cual obedece a normas internas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por Colombia, basados en condiciones universales como la dignidad humana, la igualdad, el respeto y la no discriminación por identidad de género. Dicha discriminación ha dejado una gran preocupación y la clara necesidad por articular mecanismos de protección por parte del Estado colombiano contra la transfobia y violencia por prejuicio ejercida por agentes estatales, como es el caso de las mujeres transgénero que se ven violentadas por no definir una situación militar de la cual no son receptoras.

1.1 Definición de *Transgénero*

El cuerpo es mucho más flexible y la vida en general es mucho más flexible de lo que nos quieren hacer creer, yo no pretendo ser ¡mujer! ni pretendo ser ¡hombre!; no me interesa ninguna de las definiciones al respecto, si quieren pensar que soy mujer y les gusta ¡bien!, si no ¡también!, algo que para mí ha sido una liberación gigantesca es que ya no me importa. (Baptiste, 2013)

Son las palabras con las que define su condición Luis Guillermo Baptiste (Brigitte), ex profesora de recursos ambientales de la Universidad Javeriana. Como él manifiesta, él tiene la posibilidad de transitar a través del género, una opción social tomada como persona, individuo de la especie humana.

Para efectos de la presente investigación, el concepto de transgénero se aborda sobre cuatro pilares fundamentales: persona, identidad, género y sexo biológico. Para ello, resulta necesario comprender al transgénero como parte de una realidad integral y compleja y no solo definirlo desde la categoría de género.

El transgénero es una persona, primer componente de la definición. En segundo lugar, las personas cuentan con una identidad, la cual define un auto reconocimiento como individuo de la especie humana que se interrelaciona socialmente. Como tercer elemento, tenemos al género como una construcción social y cultural que se les da a los hombres y las mujeres, dependiendo de determinadas características, comportamientos y actitudes. Por último, el sexo biológico el cual hace referencia a esas características anatómicas con las que nace cada persona, vulva o pene. Teniendo en cuenta los elementos ya mencionados, se puede hacer una aproximación al concepto, entendiendo por transgénero a toda persona de la especie humana, hombre o mujer, sea heterosexual, homosexual o bisexual, con sexo biológico determinado, la cual al identificarse con el género opuesto, suscita cierto grado de inconformidad con el género asignado al nacer.

Al respecto vale la pena señalar que la Corte Constitucional Colombiana, antes del año 2015, consideraba la noción de transgénero de la siguiente manera:

Que transita del género asignado socialmente a otro género (...) En ocasiones, el papel de género asignado por la sociedad no coincide con la perspectiva de la persona, de modo que a veces un sujeto de sexo masculino, se identifica psicológicamente con lo femenino. En este caso, a lo largo de su ciclo vital, estas personas rechazan el rol masculino asignado por la sociedad, asumen su identidad femenina y transitan hacia un rol social femenino. (Sentencia T-314, 2011)

La definición aportada, en su momento, por la corte en sentencia T 314 de 2011 hace referencia solo a la condición de las mujeres transgénero, dejando de lado a los hombres transgénero, los cuales al reconocerse como transgénero presentan una identificación psicológica con lo masculino.

Por otra parte, la Corte utiliza la acepción “que transita del género asignado socialmente a otro género”. Esta acepción deja abiertas múltiples interpretaciones, por ejemplo, el vocablo “transita” implica en sí mismo, al género contrario, o podría referirse también al género asignado. Este es uno de esos casos donde la ambigüedad semántica abre el debate acerca de cómo buscar una mejor manera de conceptualizar un término, y en este caso específico una realidad sociocultural.

El objetivo último, será abarcar dentro de dicha conceptualización a cada uno de los directos implicados dentro del conglomerado social LGBTI, ya que como Lynn Conway sostiene, transgénero y transexualismo “se encuentran frecuentemente mezclados con otras condiciones más comunes que implican conductas y apariencias” (Conway, 2006, p. 32), diferentes que pueden llevar a quien las aprecia a no diferenciarlas. Para aclarar lo antes expuesto, a continuación, se cita el siguiente ejemplo:

Así pues, si (A) hombre quiere ser (B) mujer porque así lo siente y lo cree, según la definición de la corte “transitar a otro género”, podría ser al género de (A) o al de (B), dicho en otras palabras, podría interpretarse que (A) hombre puede pasar al género de (B) a través de un rol y también podría transitar nuevamente de (B) género femenino a su género asignado inicialmente, es decir a (A). En conclusión, habría que entrar a redefinir el postulado de la Corte, teniendo presente que la persona transgénero no solamente se identifica psicológicamente con el género opuesto, sino que también hay una identificación física que permite realizar a estas personas múltiples tratamientos hormonales y quirúrgicos. Cabe anotar que los tratamientos quirúrgicos efectuados por personas transgénero no están enfocados en cambios de tipo genital (ver *Dibujo 1*, en Anexos).

Es importante mencionar este tipo de diferenciación, ya que aún en los mismos jóvenes transgénero se dan ciertas confusiones, como afirma Lynn Conway “muchos chicos TG/TS piensan inicialmente que deben "ser Gay", o que son Drag Queens o travestis, mientras tratan de encuadrar en algo que parezca representar lo que sienten” (ver *Fotografía 3*, en Anexos). El no mencionar esta diferenciación no permite una fácil comprensión del transgénero en los diferentes ámbitos, sociales y jurídicos, corriendo el peligro de caer en especulaciones. Es conveniente mencionar, que la condición de transgénero a diferencia de las figuras gay, lesbiana y bisexual, no se determina por la orientación sexual, se determina por la inconformidad presentada con el sexo biológico con el que se nace y con el género que la sociedad le ha asignado. Por otra parte, el transgénero también se diferencia de las otras figuras trans, ya que el mismo no busca una modificación quirúrgica genital. Si bien el transgénero se diferencia de otras figuras, es tener en cuenta que el mismo puede ser gay, lesbiana, bisexual o heterosexual.

Con el fin de explicar lo expresado en el párrafo anterior, se aclara que el concepto de transgénero puede estar vinculado con cada uno de los términos que componen la sigla

LGBTI, incluyendo además el vocablo heterosexual. Esto se debe a que la persona transgénero comparte características de identidad, tanto física como psicológica, con personas pertenecientes a otras condiciones. En este sentido, se entiende que el término transgénero debe ser observado con detenimiento para evitar caer en ambigüedades y/u omisiones a la hora de abordar el tema de derechos y deberes que le asisten a las personas que comparten esta condición (Ver *Figura 1* y *Figura 2*, en Anexos).

Ahora bien, el concepto de transgénero planteado por la Corte Constitucional en Sentencia de tutela 314 de 2011 evoluciona con la sentencia de tutela 099 de 2015, en la cual se construye el concepto sobre la base de la persona, cobijando a mujeres y hombres transgénero. Así la Corte establece como personas transgénero a aquellas personas con las siguientes características:

Tienen una vivencia que no corresponde con el sexo asignado al momento de nacer.

Cuando el sexo asignado al nacer es masculino y la vivencia de la persona, en los términos descritos, es femenina, dicha persona generalmente se auto reconoce como una mujer transgénero. Cuando el sexo asignado al nacer es femenino y la vivencia de la persona es masculina, dicha persona generalmente se auto reconoce (sic) como un hombre transgénero. (Sentencia T- 099, 2015)

Este término de transgénero es lo que para Butler sería la construcción del concepto, el cual no tiene carácter absoluto, ya que es susceptible “de estar siendo rehecho”. En otras palabras, lo que afirma la percepción del sujeto en un momento, dejando como resultado la construcción de un concepto supeditado a la normatividad, que para este caso particular es proporcionado por un precedente judicial. La interpretación de persona transgénero ofrecida por la Corte colombiana, de acuerdo con la base interpretativa ofrecida por Nahir en interpretación a Butler, estaría enmarcada en dos momentos: El primero, el género como adopción de lo masculino y lo femenino, y el segundo, el género sobre la base de lo que es

deseable, es decir, la proyección en un rol. Es evidente la evolución que el marco jurídico colombiano ha tenido el concepto de transgénero, ya que no abordó de manera aislada a la persona y a la normatividad, sino que por el contrario, tomó en cuenta a la persona como pieza clave en determinación del género, en su dimensión del querer ser (rol).

En Estados Unidos, el término transgénero se vislumbró una de sus primeras veces, como un tránsito hacia otro género, sin importar que en dicha situación indiferentemente se contara con una cirugía de reasignación de sexo o un tratamiento hormonal, es decir no se tenía clara la diferencia entre transexual y transgénero, así lo demostró la siguiente situación:

Estados Unidos en 1976 con el famoso caso de Steve Dain, un profesor de gimnasia en la secundaria de Emeryville, California. Steve decidió practicarse un cambio de género, lo que trajo como consecuencia la oposición de las directivas y una demanda como respuesta a la discriminación, debido a la falta de reconocimiento a su derecho al cambio de género. (Stryker, 2008, p. 11)

El término transgenerismo se vio entre mezclado con el transexualismo gracias a las mal interpretadas entrevistas y falta de información en la sociedad del condado de Alameda. Tras perder su trabajo, Dain interpuso una demanda que tubo como consecuencia la libertad de enseñar, sin embargo a pesar de la decisión de los tribunales no fue contratado para enseñar en otras escuelas.

El término reaparece en 1979 con Virginia Prince, un gran icono norteamericano. Virginia “se definía como la gran dama de la comunidad transgénero; fue la más grande defensora de los derechos que asisten a las personas con esta condición” (Conway, 2006, p. 34). En 1979 Virginia Prince propuso que el término transgénero debía sustituir al término de transexual, ya que como persona no se puede llegar a cambiar el sexo biológico esencial sin importar el número de operaciones que se lleven a cabo.

Por su parte, Beatriz Preciado (2014) defensora de la ideología Queer (ver *Fotografías 1 y 2*, en Anexos) denomina el género de la siguiente forma: “Una construcción político social, un espacio plástico, no son espacios naturales”. Afirma que “fue la medicina del siglo XIX quien creó dichas entidades para normalizar la heterosexualidad y patologizar la homosexualidad, es decir que el concepto de trastorno de género se creó para regular el sistema que une sexo y reproducción. El encasillamiento que la sociedad realiza de lo “masculino y femenino, tiene que ver, con lo estético” (Preciado, 2010) (Ver *Anexo 3*).

Según Preciado:

El movimiento “queer” no es un movimiento de homosexuales ni de gais, sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay: Marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales. Cuando se habla de teoría “queer” para referirse a los textos de Judith Butler, Teresa de Lauretis, Eve K. Sedgwick o Michael Warner se habla de un proyecto crítico heredero de la tradición feminista y anticolonial que tiene por objetivo el análisis y la deconstrucción de los procesos históricos y culturales que nos han conducido a la invención del cuerpo blanco heterosexual como ficción dominante en occidente y a la exclusión de las diferencias fuera del ámbito de la representación política. (Preciado, 2010)

Es oportuno aclarar que la disforia de género es como se conoce hoy en día al transgenerismo. Este cambio conceptual se debe a que el “trastorno de género” como antes se le denominaba a esta condición era estigmatizante, lo que trajo como consecuencia que se sacara de la lista de trastornos psiquiátricos *Diagnostic and Statistical Manual of Mental*

Disorders IV (DMS IV), mejor conocido en su traducción al español como *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*.

En algún momento se llegó a contemplar la idea del término “incongruencia de género”, pero este término también parecía ser descalificativo. Por su parte, el término trastorno que pertenecía a una clasificación psiquiátrica toma hoy el papel de un diagnóstico de disforia de género gracias al (DMS V), alejando de manera semántica y estigmatizante a la persona transgénero de un trastorno mental.

1.2 El género como construcción social

El género es una construcción que navega entre lo real y lo simbólico, siendo las sociedades quienes ubican a la persona en roles determinados, de acuerdo con sus comportamientos y actitudes, es decir, que la sociedad asigna el papel masculino o femenino, estructurando una base binaria en un marco heteronormativo, el cual establece relaciones de poder definidas por un contexto preponderantemente machista. Tal marco heteronormativo impide a la persona aceptar otras proyecciones de género, diferentes a lo que se considera como cisgénero o sexo diferente a la *cissexualidad*. Un ejemplo de ello es la percepción que se guarda de la mujer como persona suave, vulnerable, madre, y del hombre como una persona fuerte, no afeminada. Esta interpretación basa su argumento en que el sexo biológico es absoluto e invariable, y determina el género.

Como Butler señala, son las creencias binarias y heterosexistas las que regulan lo que es normal, tomando como sustento la existencia del género masculino y del femenino los cuales “dependen casualmente de dos sexos biológicos *dimórficos* y a los que les corresponden únicamente deseos sexuales hacia el sexo opuesto” (Nahir, 2013, p.80). Sin embargo, la determinación de un gran número de personas por transitar al género opuesto, sugiere un nuevo planteamiento del concepto; la determinación de conductas atribuibles a cada género

debe relacionarse con un contexto *histórico social*, planteándose una variación de las figuras en *limites geopolíticos* y de *restricciones culturales* que determinan la manera sobre *quién imagina a quién y con qué propósito*. Por consiguiente, los términos que definen el género, no tienen un carácter absoluto por encontrarse en un proceso “de estar siendo rehechos”, es decir, que analizando la problemática de las personas transgénero por transitar al género opuesto, se puede dar un nuevo planteamiento del género que no solo se base en lo binario, en otras palabras, ya no solo son los géneros masculino y femenino, se da el planteamiento de un tercer género como ocurrió en 2014 en la India, donde el Tribunal hindú reconoce a las personas trans como un tercer sexo (Rojas, 2014) y Australia, donde la alta Corte reconoce un género neutro a un transexual de nombre Norrie que no se identificaba, ni como hombre, ni como mujer (Revista Semana, 2014).

Es pertinente mencionar que el género debe ser reconocido por los mismos Derechos Humanos y no solamente por factores sociales o políticos, partiendo de la base de la dignidad humana que le asiste a la persona transgénero. Los términos de género deben entenderse sobre la base cambiante de las sociedades y sus necesidades y no desde los intereses políticos y/o conservadores de unos cuantos, vulnerando de manera oficial a través de normas y de decisiones los derechos de una parte de la comunidad.

Por otra parte, al referirse al término de género sobre una base cambiante, no puede dejarse de lado la recurrencia que el mismo tiene su articulación social unida a la repetición. Butler (2004) afirma: “La recurrencia no implica una igualdad, sino más bien la manera por la cual la articulación social del término depende de su repetición, lo cual constituye una dimensión de la estructura performativa del género” (p.25). La recurrencia que Butler plantea es la percepción del sujeto desde un punto de vista sociológico, basado en una acción o representación del mismo en la historia, y que dicha representación va conectada a una acción reiterada. Por su parte, Nahir (2013) determina:

Una teoría performativa, de este modo, se basa en una noción de temporalidad, ya que asume que es la reiteración sostenida en el tiempo de actos generalizados regulados generalmente lo que genera la ilusión retrospectiva de poseer una identidad de género previa. (p.79)

Por esta razón, sobre la base de la teoría performativa, el género se encuentra determinado por la reiteración en el tiempo, que deja como resultado la construcción de un concepto social, supeditado a una normatividad; del mismo modo, según la interpretación de Nahir a Butler, en lo concerniente a la normatividad como ya se había referido, la misma debe ser entendida en dos momentos: En primer lugar, como un descriptor de violencia “lo mundano” ejercido por algunos tipos de ideales de género, es decir, “la heterosexual complementariedad de los cuerpos” y la adopción de formas de expresión del género masculino o femenino. En segunda instancia, la normatividad direccionada al “deber ser”, “qué tipo de género es deseable y cómo sería ese universo” (Nahir, 2013, p. 79). Son estos los dos momentos en los cuales debe entenderse el género según Butler, en lo concerniente a la teoría planteada por ella misma, según la cual no puede ser tomado sobre una única estructura el hecho de que el cuerpo humano unido al género guarde un carácter meramente performativo, ya que como refiere Nahir (2013), este planteamiento ilustra que el cuerpo en complementariedad con el género “no tiene una posición ontológica distinta de los diversos actos que conforman su realidad” (p.80).

Por consiguiente, en lo concerniente a género, la normatividad debe estar encaminada al *deber ser* con el propósito de permitir una proyección del género más amplia que la ofrecida por la interpretación binaria del género, a fin de permitir una construcción del concepto desde la realidad (tránsito de género). Esto tampoco quiere decir que podamos adoptar el género como una figura únicamente performativa debido a que la ontología del género no es solo de construcción social, sino que también tiene un componente de “naturaleza”. Por lo tanto,

como manifiesta Nahir (2013), afirmar que el género tiene un carácter completamente performativo arroja como resultado que “la posibilidad de ser un transgénero, dependerá de la performatividad y su capacidad para producir géneros, independientemente de sus datos biológicos” (Nahir, 2013, p.83).

De tal manera, que el género como construcción social, debe tener en cuenta las características biológicas que son determinantes al momento de una elección de género. Por consiguiente, es conveniente preguntar: Soy hombre, ¿Por qué actúo como hombre? ¿Por qué mis características biológicas lo determinan? O, ¿se pueden ver vulnerados los derechos humanos por exteriorizar un género opuesto?

Con el fin de aclarar, es conveniente tener en cuenta el concepto de identidad de género que trae los principios de Yogyakarta - Comisión Internacional de Juristas & Servicio Internacional para DDHH (2007) en su preámbulo, el cual estipula:

La ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. (p.6)

Todas ellas, sitúan al individuo en diversos momentos de cotidianidad. Por esta razón, es pertinente hacer referencia al caso de las personas intersexuales y transgénero, quienes cuentan con ciertas características particulares, no frecuentes en un campo heteronormativo donde impera el género binario. Por consiguiente, el ser hombre o mujer en una sociedad está estrechamente vinculado con las características biológicas y de representación social (rol y

ubicación o categoría social), siendo este último el papel con el que cuenta la persona en la sociedad: Ser madre, padre, militar, ama de casa, etc. Según Ortiz (2012):

Los transgénero desde temprana edad son socializados con base en la correspondencia del sexo (hombre o mujer) y el rol de género (masculino o femenino), mediante los cuales se les otorgan pautas de comportamiento que se espera cumplan en la sociedad. (p.197)

Dicho de otro modo, las personas que se sienten identificadas con hábitos “*no adoptados por su entorno*” según lo que se espera de su género, acogen la identidad de transgénero o transexual. Este tipo de identidades de género traen consigo incidencias en materia de vulneración de derechos humanos, ya que *activistas* transgénero deben lidiar con un orden social y un régimen legal de *infrahumanity*, bajo el cual las personas transexuales son vistas como “no-personas, sin derecho a casarse, a trabajar, a usar un cuarto de baño público, o incluso a caminar por la calle con seguridad” (Kessler, s.f., p.311), debido a las condiciones de discriminación y desigualdad presentes en los diferentes sistemas sociales y culturas.

Así las cosas, existe una gran preocupación por las garantías que ofrecen los Estados frente a las obligaciones positivas de garantías de no discriminación e igualdad ante la Ley, por esta razón la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) ha citado:

El principio de igualdad ante la Ley, igual protección ante la Ley y no discriminación, pertenece al *jus cogens*, puesto que sobre el descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. (p. 23)

Es necesaria la comprensión que se tenga de género en las diferentes legislaciones y que la misma vaya conectada a la garantía de los derechos humanos, siendo propio de cada sistema la adecuación normativa y la doble protección que requiera cada persona por su condición, en

procura de la salvaguarda del derecho a la no discriminación basada en género y otros derechos que le sean propios por su condición de persona.

1.3 LGBTI y su desarrollo en Colombia: Transgénero como Condición Particular

Para efectos de la presente investigación, se ofrece a continuación una breve aclaración de lo que representa ser transgénero y cómo este se diferencia de las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Los mitos que en materia de transgénero se han formado son tan diversos como las posibilidades del género, llegando a conclusiones erróneas permeadas de fanatismo religioso y actos aprendidos; por tal razón, se hace necesario retomar el concepto de *persona transgénero* antes mencionado para una mejor comprensión que conduzca quizá a una mayor tolerancia hacia la diversidad.

El transgénero es toda persona de la especie humana, hombre o mujer, sea heterosexual, homosexual o bisexual, con sexo biológico determinado, la cual al identificarse con el género opuesto, suscita cierto grado de inconformidad con el género asignado al nacer.

Concepto que es herramienta fundamental para hallar diferencias y posibles relaciones de las personas transgénero con otras que componen el grupo LGBTI, para una mejor comprensión esta investigación plantea cinco ejemplos: Primer ejemplo, (L) es una mujer que siente una atracción sexual o emocional por una persona de su mismo sexo, es decir una mujer. En este primer ejemplo podemos establecer que (L) es lesbiana, su orientación no implica una identidad con el género masculino, en otras palabras, (L) no quiere dejar de ser mujer, por sentirse a gusto con su género.

Segundo ejemplo, (G) es un hombre que siente una atracción sexual o emocional por una persona de su mismo sexo, es decir un hombre, su orientación no implica una identidad con el género femenino; dicho de otra manera, (G) no quiere dejar de ser hombre, por sentirse a gusto con su género.

Tercer ejemplo, (B) es un hombre que siente una atracción sexual o emocional por personas de género masculino y femenino, su orientación no implica una identidad con el género femenino; en otros términos, (B) no quiere dejar de ser hombre, por sentirse a gusto con su género.

Cuarto ejemplo, (T) es un hombre que se siente fuertemente identificado con el género femenino, es decir asume su rol, en este caso (T) puede ser heterosexual, homosexual o bisexual, dependiendo del individuo y su orientación sexual. En este caso (T) quiere dejar de ser hombre por no sentirse a gusto con su género, por ello desea y planifica la modificación de su cuerpo a través de hormonas o estrógenos, cambio que no conlleva a una modificación genital (transgénero). Dada la situación que el objetivo de dichos cambios fuese la modificación de su órgano genital estaríamos ante un transexual.

Quinto ejemplo, (I) es una persona, hombre o mujer que puede sentir atracción sexual o emocional hacia hombres o mujeres, pero su sexo tiene discrepancia entre el sexo biológico y las características genitales con las que cuenta; (I) cuenta con un órgano reproductor de hombre (siendo mujer) o un órgano reproductor de mujer (siendo hombre). En el caso de (I), a diferencia de los otros sujetos, se le concede el privilegio de escogencia de su sexo, por presentarse cambios tendientes a uno de los dos sexos, sea el de hombre o sea el de mujer. Estas personas antes eran denominadas con el término de hermafroditas, hoy son conocidos como intersexuales (ver *Figura 3*, en Anexos).

En consecuencia, se puede determinar que la condición de transgénero en hombres o mujeres no determina una homosexualidad segura, por ser esta una condición que toma como base el tránsito de género y no una orientación sexual, lo que no es excepción para que en algunos casos los hombres o las mujeres transgeneristas puedan guardar preferencias heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Según Lynn Conway (2006):

Dicha “confusión” nace desde hace tiempos cuando persona gay entraron en un "juego de roles". Durante décadas y décadas han existido hombres gay que actúan "afeminadamente" y que emulan el rol de la mujer dentro de una relación de pareja, a pesar de que poseen una fuerte identidad de género masculina y de que para nada se sienten mujeres. (p. 45)

1.4 Mujer Transgénero como integrante del conglomerado LGBTI en el Derecho Colombiano

En la década de los 40 en Colombia, la comunidad gay tiene sus inicios bajo el nombre de *Los Felipitos*, una comunidad de clase media y alta. Este grupo se caracterizó por sus acercamientos amistosos: con frecuencia, solían asistir a lugares encubiertos, donde exteriorizaban abiertamente su conducta sexual y después de ello retornaban a la sociedad bogotana, ocultando su orientación sexual o identidad de género en la vida cotidiana. “Les decían *Los Felipitos*, el nombre que tenía más de jardín infantil que de grupo secreto, reunió a los homosexuales declarados de Colombia en la década del 40” (Patiño, 2001, párr. 6).

Sin embargo, en la década de los cincuenta, las personas transgeneristas no exteriorizaban el género al cual querían pertenecer por temor al rechazo y a la exclusión, debido al sistema sociocultural de la época, aunado a la crisis de valores por la guerra de partidos, lo que deja suponer una resignación por parte de los sujetos de la época, ocupando un rol no deseado por temor a represalias.

Es importante insistir en que no toda persona homosexual es transgenerista, ya que son dos condiciones diferentes que pueden ir unidas en algunas personas, y que en los cincuenta no podían ser exteriorizadas por miedo a la venganza social y de los agentes estatales.

En la década de los sesenta la escena gay en Colombia se encontraba en la penumbra y el transgenerismo no mostraba señales. Los homosexuales eran objeto de agresiones por parte

de la policía, lo que llevó a idear mecanismos de defensa como el bombillo rojo, un mecanismo de alerta ante la presencia policial, utilizada en aquel tiempo en lugares de encuentros homosexuales. Al encenderse este bombillo, las parejas adoptaban actitudes heterosexuales.

Solo hasta la década del ochenta el Código Penal Colombiano dejó de tipificar la homosexualidad como delito.

En el Código Penal de 1980 desapareció el delito que sancionaba a quienes realizarán actos homosexuales en Colombia. Este cambio legal se realizó bajo la vigencia de la Constitución de 1986 y en un período de tiempo en el cual la comunidad homosexual o LGBT no tenía ninguna visibilidad pública, ni mucho menos activismo político.

(Albarracín, 2015, p. 4)

Sin embargo, esta no era razón suficiente para la Policía; una vez que recogían a estas personas, las trasladaban al Cerro de Monserrate en Bogotá, donde arrojaban sus prendas al vacío y les proporcionaban baños de agua helada, dejándoles como única opción bajar desnudos a la ciudad (Mora, 2013).

Fue durante la época de los setenta que Manuel Antonio Velandia Mora y León Zuleta Ruiz se conocieron y dieron inicio al movimiento de liberación homosexual en Colombia, más específicamente en el año de 1978. Posteriormente en 1981, se da la creación de la revista *Ventana Gay*, la cual da pie a la creación del instituto Landa de Colombia en el año de 1982, cuando se llevó a cabo la primera marcha pro defensa de los derechos de las personas gay; tuvo espacio en la ciudad de Bogotá un 28 de junio, y contó con la presencia de veintidós hombres homosexuales y una mujer lesbiana (Mora, 2013).

Más tarde, con la existencia de grupos paramilitares entre los cuales se encuentran Amor a Medellín, Amor a Manizales, Mano Negra y Muerte a los Homosexuales, León Zuleta fue apuñaleado en el año 1993, por ser el fundador del primer movimiento homosexual en

Colombia. La muerte de Zuleta fue objeto de controversia, y a su vez un peldaño para lo que hoy se conoce como comunidad LGBTI fue justamente la lucha de la comunidad gay la que permitió que en la actualidad las mujeres transgénero tengan un reconocimiento dentro del conglomerado LGBTI.

1.5 Instrumentos internacionales en materia de protección de las Mujeres

Transgénero

La Constitución Política es un elemento de orden jurídico del Estado, y reposa en el poder público a través de sus órganos ejecutivo, legislativo y judicial, siendo función de los mismos la defensa y garantía de los derechos humanos, sin distinción alguna.

En su reforma de 1991, registra la figura de *persona* dentro de su cuerpo normativo en los principios fundamentales, en procura de garantizar una extensa defensa, así como la creación de mecanismos adecuados para permitir el acceso a la justicia, fomentar la igualdad y la no discriminación basada en la raza, el sexo o la religión, promoviendo condiciones efectivas de igualdad en comunidades que sean víctimas de ésta (en el caso particular, las personas transgénero). Tiene todo ello por eje al ser humano, entendiendo que hay derechos que le son inherentes y que pueden no estar contenidos de modo explícito dentro de la normatividad, lo cual no significa que no sean objeto de protección.

Pero a pesar de que la carta magna colombiana ofrece un cuerpo jurídico robusto en materia de protección de la no discriminación, y el reconocimiento que su Art. 93 hace de los tratados y convenios internacionales, se siguen suscitando tratos degradantes y violentos hacia la población transgénero. Frente a ello, el sistema internacional ofrece instrumentos para facilitar la protección eficaz del derecho a la no discriminación. El Derecho Internacional ratifica la función del Estado como garante a través de las obligaciones positivas, del respeto por los derechos y libertades. Así lo dispone la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien “ha indicado que los tratados internacionales de derechos humanos (...) son instrumentos vivos que deben ser interpretados de conformidad con los tiempos actuales y con base en un criterio evolutivo” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016, p.45).

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ratificado por Colombia el 31 de julio de 1973, en su Art. 1, contiene el apartado que estipula “otra condición social” dentro de la obligación de los Estados parte, por incentivar el respeto y las garantías sin discriminación. De tal manera “la Comisión y la Corte Interamericanas han afirmado que la orientación sexual y la identidad de género están protegidas por la frase “otra condición social” del artículo 1.1” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2016, p.45).

De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (PIDCP) ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969, en su artículo 2.1 estipula lo siguiente:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (ONU, 1976, Art.2)

En contraste, el (PIDCP) en su artículo 2.2 proporciona claras tareas al Estado como lo es la toma de medidas para adaptar la legislación y la práctica de las obligaciones que emanan del mencionado instrumento, facilitando en las personas el efectivo goce y ejercicio de los derechos en cada Estado.

En un mismo sentido, las mujeres transgénero (ver *Fotografía 4*, en Anexos), por su identidad femenina, reciben protección de dos instrumentos: la CDAW Convención sobre

eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la Convención *Belém do Pará*. La CDAW o mejor conocida como la Carta Magna de las mujeres “fue suscrita por Colombia el 17 de julio de 1980, aprobada mediante la Ley 051 de 1981 y reglamentada por el Decreto 1398 de 1990” (Humanas Colombia, s.f., párr.1) , es un instrumento que permite la protección de la mujer en el marco de los “derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer”, este instrumento muestra de manera expresa los factores que dan lugar a la discriminación en contra de la mujer, estos son:

Distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (Sistema de Naciones Unidas de Panamá, 2010, p. 10)

Al igual que otros instrumentos, esta convención en su artículo 2 otorga obligaciones a los Estados que pueden traducirse como obligaciones positivas como (condenar todas a formas de discriminación en contra de las mujeres, establecer adecuaciones de las constituciones, abolir medidas legislativas y preceptos penales que tengan como fin el menoscabo de los derechos de las mujeres, efectividad jurisdiccional para la protección de los derechos de las mujeres frente a actos de discriminación y vigilancia de agentes estatales e instituciones) y obligaciones negativas como abstenerse de consentir la discriminación en contra de la mujer. Esta convención en conjunto con la convención *Belém Do Pará*; conforman en su conjunto un *corpus iuris* en materia de género.

La *Convención Belém do Pará*, elaborada para “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” en razón de su género. Al igual que la protección brindada por el

Pacto de San José, a través de la expresión “otra condición social”, nos ofrece en su artículo 9 una protección abierta que “se refiere a la obligación del Estado de tener especialmente en cuenta la situación de la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón de varios factores “entre otros”, estos necesariamente incluyen la orientación sexual y la identidad de género” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.50).

Por su parte, “la CIDH enfatiza que en virtud de la *Convención Belém do Pará*, los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e *intersex*” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.173). Tal planteamiento se vincula a las obligaciones del Estado colombiano frente a la problemática de las mujeres transgénero afectadas por no existir una Ley reguladora que indique a las autoridades del Ejército su identidad, derechos y obligaciones, sin necesidad de acudir a interpretaciones fáciles por no comprender la identidad de género fuera de un patrón hegemónico *heteronormativo*.

De esta manera, la *Convención Belém Do Pará* aprobada por Colombia por medio de la Ley 248 de 1995 protege a las mujeres frente a la violencia, lo cual incluye a las transgénero vulneradas por patrones sociales y culturales de carácter androcéntrico. Por tal razón, la Convención insta a los Estados en su Art. 8, literal *b*, a:

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. (OEA, 1994, Art. 8)

En el caso particular de análisis, las mujeres transgénero menores de 18 años se encuentran además cobijadas en el proceso de definición de su situación militar, por la *Convención sobre*

los Derechos del Niño ratificada por Colombia a través de la Ley 12 de 1991, la cual establece en su Art. 1 que todo menor de 18 años es considerado *niño*, proporcionándole una doble protección en razón de su edad y su condición de mujer. “En definitiva, tomando en cuenta la normativa internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido 18 años de edad” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002, p.57),

Para el presente caso, ven ellas menoscabados sus derechos por ser receptora de una Ley de reclutamiento que no le es obligatoria, convirtiéndose en víctima de represión por agentes del ejército quienes, al dar inicio al proceso de reclutamiento, no disponen del personal capacitado en materia de género para llevar a cabo un adecuado acompañamiento. Éste tendría que basarse en información significativa y articulada en vinculación con la legislación nacional y los instrumentos internacionales, y no una de orden especulativo. Tales vacíos informativos hacen que las mujeres transgénero menores de edad se vean afectadas por encontrar un componente de sexo masculino en su registro civil o tarjeta de identidad, cuando es otro su auto reconocimiento. Redunda ello en la exigencia de una presentación para el proceso de definición de su situación militar, que en el mejor de los casos tiene como objeto la liquidación de la libreta militar: un pago por un documento marcial de segunda clase que en Colombia es exclusivo un documento de los varones. Así, la institución Ejército tendría que reconocer que en sus procesos de definición de situación militar en menores de edad,

El respeto por los derechos del niño y de la niña implica ofrecerles cuidado y protección, así como reconocer, respetar y garantizar su personalidad individual y su condición de sujetos titulares de derechos y obligaciones. Niños y niñas requieren medidas especiales de protección, en razón de su desarrollo físico y emocional.

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.183)

Lo anterior, se habría de dar en el marco del respeto a la dignidad humana, y en procura de los derechos fundamentales, partiendo del principio de interés superior que les confiere su condición de niños, y de lo consagrado en el Art. 19 de la *Convención Interamericana de Derechos Humanos*.

Lo señalado confiere protección a las mujeres transgénero, afectadas por su condición y los prejuicios sociales que sobre ellas existen durante el proceso de la definición de su situación militar (ver *Fotografía 5*, en Anexos). Por esta razón, el Estado colombiano a través de sus agentes civiles y militares debe hacer efectivos sus fines, entre los que se encuentra la protección por parte de las autoridades de todo ciudadano colombiano. Esto incluye la identidad de género fundada en principios de igualdad y no discriminación.

Es clara la protección que las mismas normas nacionales e internacionales dan a las personas sin discriminarles por su género, raza o condición, dejando como precedente el respeto que Estado y sociedad deben brindar a la persona. Los derechos humanos no pueden ser objeto de suspensión por parte de aquél, razón por la cual es necesario hablar de un núcleo de derechos que en ningún momento pueden ser cesados, ni siquiera en situaciones de excepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por opinión consultiva, declara que no se pueden suspender las garantías judiciales necesarias para la salvaguarda de los derechos fundamentales, para lo cual existen instrumentos como el *hábeas corpus* y la *acción de tutela*, conocida en otros países como la *acción de amparo* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1987).

Los Derechos Humanos, en materia de personas transgénero, han contado con obstáculos profundos a lo largo de la historia; en algunos casos, podría llegar incluso a pensarse que como manifiesta Kendall Thomas “los transexuales no son contados como humanos” (como se citó en Currah, 2000, p.311). La deshumanización dada su dimensión corporal, ha sometido a las personas transgénero a agresiones, teniendo que soportar una condición de

infrahumanity, es decir, no ser contados como humanos (Currah, 2000). Por esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), en su cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en la parte de sus conclusiones recomienda al Estado colombiano:

Adoptar las medidas necesarias para prevenir actos de violencia y discriminación contra personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e *intersex*, protegerlas de estos abusos, y responder con debida diligencia cuando son cometidos, tanto por parte de agentes estatales como por parte de terceras personas y grupos armados. (p. 845)

Del mismo modo, la CIDH recomienda al Estado colombiano, tomar medidas de carácter disciplinario frente a funcionarios que cometan atropellos contra personas de la comunidad LGBTI, así como el diseño de una política pública integral en materia de los derechos que les asisten.

Así, Colombia cuenta con importantes herramientas por parte de la CIDH (Informe Violencia Contra Personas LGBTI del 12 de noviembre de 2015); también, con las de la Corte Constitucional y la Comunidad Transgénero (en forma de *sentencias de tutela*), y la Defensoría del Pueblo (Informe *Voces Ignoradas*). Sin embargo, no cuenta con una Ley integral de identidad de género, lo que ha llevado a múltiples procedimientos judiciales. Antes de 2015, resultaba imposible el cambio de sexo en el registro civil. Fue así como el Decreto 1227 del 4 junio de 2015, reguló el registro civil de las personas y los mecanismos para la corrección, en otras palabras, el beneficio de acudir a una notaría para el cambio de sexo en el registro civil a personas mayores de edad, sin contar con las mujeres transgénero menores de edad, afectadas por no poder acceder a un beneficio al cual tienen derecho.

1.6 Situación de las Mujeres Transgénero en el Mundo

A lo largo de la historia, las personas transgénero han tenido que luchar por el reconocimiento de sus derechos, consiguiendo ser visibles en las sociedades de las cuales son parte. En Norteamérica, “el primer caso documentado es el de Lili Elbe una persona que se sometió a la castración y a un intento (fallido) de implantación de útero femenino” Bulloough (como se citó en Garosi, 2012). Este caso fue el precedente de muchos otros conocidos a nivel mundial, entre ellos el de Christine Jorgensen “un ex soldado del ejército americano quien utilizó hormonas como un recurso y posteriormente se sometió a una intervención quirúrgica de castración” Marcasciano (como se citó en Garosi, 2012). Si bien los años 50 fueron una clara censura para el transexualismo y transgenerismo, también se puede afirmar que fue esta época la precursora de los tratamientos quirúrgicos.

En la época de los setenta la comunidad transgénero empieza a agruparse con el fin de darse a conocer “(...) a la opinión pública sobre la cuestión de los derechos de las personas transgénero, a ser reconocidas como su género de elección” (Garosi, 2012, p.149).

Posteriormente, en la década de los ochentas la población transgénero fue blanco del SIDA, llevando al transgénero “al escaso acceso a los servicios sanitarios debido a la pobreza, el estigma y el aislamiento social” (Stryker, 2008, p.113).

Es importante hablar de la modificación en cuerpos de personas transgénero, toda vez que en algunas legislaciones como en la de los Países Bajos se requiere modificaciones imperativas para el cambio de género, siendo necesarias en las mismas la esterilización obligatoria para el acceso a otros derechos como el cambio de nombre o de sexo en los registros correspondientes (GaistarNews, 2013). En las diferentes legislaciones a través de la historia, la modificación corporal quirúrgica y hormonal del transgénero es un precedente importante en la lucha por el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos del mismo, desconocerlo es borrar toda la lucha de una comunidad, ignorando cómo, cuándo o

dónde surgió la protección de los derechos de estas personas, las cuales incluso llegaron a ser consideradas portadoras de una patología o marginadas sociales, dándoles un trato inhumano, negándoles el total goce de sus derechos. En ningún momento puede pensarse en la exigencia por parte del Estado de realizar modificaciones corporales como requisito para reconocer los derechos a las personas transgénero, ya que como Lynn Conway consideró: “La transición transgénero no requiere la "autorización" de ninguna autoridad” debe garantizarse un derecho al reconocimiento y respeto basado en la dignidad humana que tiene todo transgénero por el simple hecho de ser persona y que el mismo requiere una protección reforzada en cada uno de los Estados por ser objeto de discriminación.

El Tribunal Europeo ha considerado, como en el caso de Sentencia L. vs Lituania del 11 de septiembre de 2007, que la exigencia de modificaciones en los cuerpos de los transgénero viola el art. 8 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (ONU, 1950), el cual hace referencia al Derecho al Respeto y a la Vida Privada y Familiar.

En su momento, España libró una ardua lucha por el reconocimiento de una norma reformista que reconociera a las personas transgénero el derecho a la modificación en aspectos puntuales de su registro civil. La Ley 3 de 2007, que regula la corrección en el registro en materia de sexo y nombre de las personas transgénero, fue el fruto de varias luchas por el reconocimiento de derechos. Esta iniciativa fue un punto importante en materia de los derechos que asisten a las personas transgénero, toda vez que la misma normativa ha permitido poseer un marco de referencia para las diferentes legislaciones que no cuentan con una normatividad reguladora en temas similares.

En España, uno de los principales objetivos de las personas transgénero con la Ley 3 de 2007 fue la no exigencia de modificación genital para cambio de nombre o sexo en su (DNI) documento nacional de identidad o pasaporte.

Por otra parte, la Ley 3 de 2007 contó con unos requisitos para su aplicación entre los cuales cabe resaltar: Contar con un diagnóstico de disforia de género mediante informe médico o psicológico clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, recibiendo tratamiento médico por lo menos durante 2 años para el acomodamiento de sus características físicas a las correspondientes del sexo reclamado. Del mismo modo, la mencionada Ley estipuló que no sería necesaria la cirugía de reasignación de sexo para la rectificación del género en el registro, en otras palabras, cobijó a las personas transgénero.

En la actualidad, la mencionada Ley 3 de 2016 (*Ley de Transesualidad*). Esta Ley destaca la garantía de la integridad corporal de los menores intersexuales (con caracteres sexuales masculinos y femeninos) para evitar "que sean operados en su infancia para asimilarlos al patrón normativo de hombre o mujer, sin saber cuál es la identidad de dicha persona" (Triceño, 2016).

Es importante determinar que el transgenerismo y la transexualidad son una realidad social globalizada que necesitan un reconocimiento, es decir, una obligación de regulación, según Quinche & Peña (2013): "Aquí es necesario precisar que se trata de una obligación positiva, encaminada a lograr hacer efectivo el derecho por medio de normas y no a impedir su realización con regulaciones que hagan inane su contenido"(p.27), tarea que corresponde a quienes tienen a cargo la elaboración de las Leyes en los diferentes Estados. Es por ello que el logro español se convierte en un referente para otros países cuya legislación aún está corta frente al tema.

Después de analizar el caso europeo, llega el momento de acercarse más al asunto que atañe directamente a la presente investigación, haciendo una transición por los casos más representativos en Latinoamérica.

1.6.1 Transgénero en Latinoamérica (Ley de identidad de Género)

En la actualidad, son muchos los Estados latinoamericanos que se encuentran debatiendo en torno a la promulgación de una Ley específica de identidad de género.

En el caso chileno, a pesar de la introducción de un proyecto de Ley en el año 2013 por parte de un gran número de senadores, fue hasta el año 2015 que el gobierno no estuvo de acuerdo en la reglamentación del mencionado proyecto, el cual tiene por punto específico la regulación de la identidad de género; el proyecto de Ley en la actualidad se encuentra en su fase inicial, fue aprobado por la sala y en el momento, está congelado en la comisión de Derechos Humanos, esperando a ser acogido en su totalidad.

La población transgénero en Chile se encuentra coartada por los procedimientos judiciales a los que tiene que acudir para lograr el cambio de nombre y de sexo en el registro civil, derechos que no deberían constituir trámites judiciales engorrosos y términos largos, ya que la no coincidencia de la identidad elegida con el nombre de la persona, trae como consecuencia el difícil acceso de la población transgénero a la vida laboral, teniendo que ejercer trabajos informales entre los que se encuentran los trabajos sexuales.

Por este motivo el gobierno chileno ha estado abierto a múltiples sugerencias por parte de la comunidad transgénero, llegando así al planteamiento de una modificación al proyecto de Ley para brindar un trámite expedito al cambio de nombre y sexo en el registro civil, mediante un procedimiento simple (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, 2015). En la actualidad a agosto de 2015, el proyecto de Ley de identidad de género ha sido aprobado tan solo en 3 de sus artículos, los que corresponden a un trato acorde a la identidad de género, una definición sobre la identidad de género y la inclusión de niños y niñas para que puedan realizar cambio en su sexo y nombre de manera legal.

Por su parte, el Estado de Argentina dispuso una Ley específica en la materia, la Ley 26.743 aprobada por la sala de sesiones del congreso argentino en el mes de mayo de 2012.

Dicha Ley cuenta con múltiples garantías en dignidad humana, derecho al libre desarrollo de la personalidad (consagrado en el artículo 11 del mismo cuerpo normativo), herramientas y procedimiento sencillos para el cambio de nombre y sexo en el registro de cada persona transgénero. La Ley 26.743 en lo atinente a cirugías y tratamientos hormonales es supremamente clara y garantista, al permitir a la persona elegir a través de su consentimiento; para el caso de menores de 18 años el Estado de Argentina fue muy prudente al determinar que los menores de edad que quieran realizar algún tipo de modificación en el registro, deben realizado a través de su representante, y como se estipula en el art 5 “con expresa conformidad del menor” (Ley 26.743, 2012, Art. 5).

No cabe la menor duda que el Estado argentino cumple una importante labor en lo concerniente a derechos humanos en materia de transgenerismo, efectivizándolos a través de una obligación positiva del mismo Estado, garantizando no solo la efectividad de sus procedimientos internos, sino también brindando a las personas transgénero un verdadero marco de respeto y reconocimiento.

En el caso de Ciudad de México, una reforma al Código Civil del Distrito Federal reguló la identidad en materia de género a través de un procedimiento administrativo de *Reconocimiento de Identidad de Personas Trans*, al reconocer el cambio de sexo, en la correspondiente acta de nacimiento, sin necesidad de un procedimiento judicial como ocurría hasta antes de la reforma en 2014 (Gaceta Federal de Distrito Federal, 2015). El cambio de género trajo consigo esperanza a la población transgénero, quien sufrió las consecuencias del no reconocimiento de un cambio que necesitaban. Es pertinente mencionar que la presente reforma sólo cobija a Ciudad de México, y no a los otros estados mexicanos, sin descartar que en el futuro se pueda extender a otras regiones de la Federación.

Al hablar de transgenerismo en Colombia, no se puede pasar por alto la victoriosa lucha de la comunidad gay por el reconocimiento de los derechos que le asisten. A través de su

enfrentamiento, esta comunidad ha construido la estructura sobre la cual reposan hoy los derechos transgeneristas.

2 Definición del servicio militar en las mujeres transgénero

2.1 Definición de Servicio Militar en Centro América y Sur América

Por parte de los Estados, existe una obligación positiva (emanada de que la obligación) de crear una legislación específica, en lo concerniente a la definición de la situación militar para la comunidad trans, independientemente, si se hace tránsito de hombre a mujer o de mujer a hombre. Lo anterior, debido a que dichas personas se ven afectadas por las Leyes de reclutamiento de cada Estado, al ser reconocidas como un nuevo género, el cual carece de normatividad al respecto. Esta ausencia de legislación, se evidencia en dos Estados diferentes a Colombia, Chile en sur América y México en centro América.

El Estado chileno, cuenta con dos tipos de servicio militar, uno voluntario y el otro obligatorio. El primero se da por la disposición de quien quiera hacer parte y el segundo cuando quedan disponibles “cupos del contingente necesario para las FF.AA” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 2). Para este efecto, son llamados a prestar el mencionado servicio, “los hombres chilenos entre 17 y 24 años, el cual tendrá una duración máxima de hasta dos años” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 2).

Se exige que una vez se hayan cumplido los 17 años, se deberá llevar a cabo la actualización de domicilio en el registro civil, para así hacer parte del registro militar. De igual manera, el Estado chileno permite que jóvenes de 17 años, puedan prestar el servicio, diligenciando un formulario de voluntariedad. Para las mujeres, el servicio militar es voluntario y su permanencia es de un año, siendo requisitos para la prestación del mismo, “ser chilenas, haber rendido Tercero Medio, ser solteras, sin hijos y tener salud compatible” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 7). El servicio militar puede ser prestado en el

“Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y, en ciertos casos, en la Defensa Civil” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 8).

La prestación del servicio militar en Chile, puede llevarse a cabo en modalidades diferentes a las del servicio militar ordinario. Estas prestaciones son: servicios de carácter profesional, en lo concerniente a profesiones que sean motivo de interés para las fuerzas armadas, “cursos especiales de instrucción militar, hasta por ciento cincuenta días, para estudiantes del último año de enseñanza media o de establecimientos de educación superior del Estado o reconocidos por este” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 12). En Chile, el servicio militar es susceptible de ser pospuesto y el tiempo límite es de 12 años. Se puede posponer “por estar cursando estudios superiores o por estar en cuarto año medio, o estar haciendo uso de becas o acreditar residencia en el extranjero” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 16). Se presenta exclusión en los casos de “incapacidad física o psíquica permanente, o por inhabilidad moral calificada, o quienes hayan sido condenados a una pena aflictiva (mayor a tres años y un día)” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 17). En el caso de ser remiso, el Estado chileno cuenta con “una pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en su grado medio” (Congreso Nacional de Chile, 2013, párr. 29).

En lo relacionado con la definición de situación militar para personas transgénero, según la Organización *Organizando Trans Diversidades*(OTD) de Chile, esta situación aún no ha tocado al Estado chileno, puesto que, según lo consultado a la entidad vía chat institucional de Facebook, “en Chile las Fuerzas Armadas tienen un perfil tremendamente fascista que viene de la época de la dictadura” (comunicación personal, 8 de noviembre del 2015), siendo esto un obstáculo para que se presenten este tipo de situaciones a futuro.

Por su parte, el Estado mexicano ve el Servicio Militar Nacional (en adelante S.M.N.) como una obligación derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

tal como lo señala en su artículo 5. El S.M.N es obligatorio en México para los hombres mayores de 18 años y menores de 30, que sean mexicanos de nacimiento; y voluntario, para las mujeres u hombres de 16 y 17 años que lo soliciten. En el país, se han dispuesto de otras formas para el cumplimiento del S.M.N, entre las cuales se encuentran, capacitaciones y prácticas en polígono, las cuales tienen como fin el fomento de trabajo. Para el cumplimiento de dichas formas, el Estado mexicano dispuso en el 2013 de “dos compañías del Servicio Militar Nacional y en el año 2014 de diez compañías más a razón de una por cada región militar” (SEDENA de México, s.f., párr. 3).

A pesar de que el Estado mexicano, consagró la participación voluntaria de la mujer en el S.M.N. después de 1999, todo en virtud de la “igualdad de derechos y obligaciones entre varones y mujeres” que establece la (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, Art. 40). Se observa, según el análisis realizado en el Estado de México por Bruno Damian vía chat personal de Facebook, que “no se sabe exactamente si aceptarían a una persona transgénero en el ejército” (comunicación personal, 13 de noviembre del 2015). En los casos en los cuales, una mujer transgénero desee solucionar su situación, es necesario que se presente y que se acoja a una de las exenciones, dependiendo de cada caso en particular, como por ejemplo: ser mayor de 30 años; o que además de ser ciudadano mexicano, la persona cuente con otra nacionalidad o que se demuestre algún tipo de impedimento moral o incapacidad física.

A todo lo anterior, para el debido proceso, debe anexarse la C.U.R.P Clave Única de Registro de Población y la correspondiente Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional del interesado. Si se cuenta con la condición de remiso, “debe presentar una constancia emitida por la junta de reclutamiento del lugar donde nació, donde se especifique que no se le ha expedido cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional” (SEDENA de México, s.f., párr. 5).

Es importante insistir, en que la regulación del servicio militar en personas transgénero a la luz de las diferentes legislaciones, debe mirarse como un proceso encaminado al reconocimiento de los derechos humanos, que asisten a la persona transgénero en lo relacionado con la definición de su situación militar, tales como, el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la Ley contra ataques e injerencias. Dicha protección, va encaminada al respeto por la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia personal, al igual que a la libertad de consciencia y de expresión, y en contra de ataques a la honra o a la reputación de las personas; todo dentro del marco del respeto a la comunidad, tal y como lo dispone el numeral 1 del art. 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2.2 Servicio Militar en Colombia

De acuerdo con lo expuesto por la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia (2014), en su informe *Servicio Militar Obligatorio en Colombia*, son muchas las barreras encontradas por quienes deciden definir la situación militar, dentro de las cuales se encuentran las mujeres transgénero. Entre esas barreras cabe resaltar las siguientes:

Demoras e irregularidades causadas por (i) la incorrecta aplicación de la normatividad vigente y la jurisprudencia por parte de las autoridades militares; (ii) la imposición de obstáculos y barreras para la definición de situación militar; (iii) la extralimitación de las facultades sancionatorias por parte de las autoridades militares. (p.7)

En Colombia, el servicio militar se encuentra estipulado en el Artículo 216 de la Constitución Política de 1991. El cual, expresa una clara obligación “de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas” (p. 255). De igual manera, el artículo antes mencionado, plantea claramente, que es la Ley la que determinará cuáles deben ser “las condiciones que en todo

tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por prestaciones del mismo” (p. 255).

Es pertinente mencionar que, a la luz de una primera lectura del artículo, no queda muy clara la figura, por lo que es necesario acudir a las interpretaciones de la Ley 48 de 1993, al decreto 2048 de 1993 y a las definiciones de la Corte Constitucional.

La prestación del servicio militar es una obligación constitucional, como se explicó, lo cierto es que la Carta Política también señala que dicho compromiso puede ser objeto de eximentes, así como de prerrogativas, defiriendo a la Ley las condiciones en que ello tendrá lugar (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-879, 2011).

Teniendo en cuenta la condición de las personas transgénero, frente a la definición de situación militar, pueden vislumbrarse cada vez más interrogantes que parecen ser eslabones en una cadena de impedimentos y violaciones a derechos. Tal es el caso, de las mujeres transgénero menores de edad, quienes no pueden cambiar su sexo en el registro civil de nacimiento, puesto que, el Decreto 1227 de 2015, establece como principal requisito de solicitud “la cedula de ciudadanía de la persona solicitante” (Art. 2.2.6.12.4.4.).

Es de completa relevancia lo anteriormente planteado, pues según la Ley 48 de 1993, en su Art. 14 párrafo 1, los alumnos de estudios secundarios de último año deben inscribirse para la definición de situación militar, arrojando esto como posible consecuencia, la exigencia de una inscripción cimentada en una identidad diferente a la elegida por las mujeres transgénero, en algunos casos, se puede llegar a situaciones, tales como, la exigencia por parte de las autoridades militares de un cambio de sexo en el registro civil como requisito para no realizar la inscripción o en algunos casos ser víctimas de prácticas sistemáticas de reclutamiento por no tener apariencia de mujer. Como estas son muchas las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres transgénero colombianas que desconocen sus derechos.

A pesar de existir dos sentencias cumbre, en lo concerniente a la exigencia de libreta militar a las mujeres transgénero, la primera interpuesta contra la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Dirección Nacional de Reclutamiento – Ejército Nacional para acceder a un trabajo (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia T-476, 2014) y la segunda interpuesta contra de la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional y de la Dirección de Diversidad Sexual del Ministerio del Interior debido a una multa de 10 años que se le cargó a una mujer transgénero por no presentarse a definir su situación militar durante dichos años (Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia T-099, 2015), es evidente que, en la actualidad los funcionarios de la institución ejército parecen tener una interpretación literal del artículo 10 de la Ley 48 de 1993 (todo varón...) y más cuando de estudiantes de último año de secundaria se trata.

Las listas con las que cuenta el ejército se las mandan los colegios. El ejército le pide libreta militar a los chicos transgénero, si estos ya se reconocieron aun estando en el colegio, y si dicho reconocimiento se da en la universidad, igual sucede que es un requisito para graduarse (Intervención Ciudadana de Colombia Diversa; La Coalición de Organizaciones Transgénero del Aquelarre, El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS); El Grupo de Derecho Interés Público (GDIP) & Dejusticia, 2014).

Son considerables los avances que el sistema colombiano ha logrado en lo concerniente al tema de definición de situación militar de mujeres transgénero con relación a otros sistemas latinoamericanos, pero aun así no hay suficiente claridad en la materia, lo que ha generado, en algunos casos, una interpretación literal y una inadecuada aplicación normativa, con actuaciones que desafían las posiciones de la Corte Constitucional, como consecuencia de la

ausencia de una Ley reguladora de situación militar para personas transgénero. Por esta razón, el (Ejército Nacional-Jefatura de reclutamiento, s.f.) estipula que:

En estos momentos, no existe una Ley taxativa con relación al proceso de definición de situación militar para la comunidad LGTBI, por lo tanto, el proceso se realiza conforme lo indica la Ley 48 de 1993, es decir, como lo realiza todo varón colombiano, mientras aparezcan en su documento de identidad con género masculino, deben definir su situación militar porque así lo estipula la Ley. (p.14)

Debido a esta situación, son muchas las mujeres transgénero que desconocen sus derechos y temen solicitar algún tipo de información, y más en el caso de menores de edad.

2.3 Mujer transgénero menor y mayor de 18 años frente a la definición de situación militar

Para presentar de una manera adecuada, la problemática de las mujeres transgénero frente a la definición de situación militar, es necesario abordarla desde la óptica de las mujeres transgénero menores de 18 años, puesto que, es este el momento en el cual la Ley de reclutamiento plantea como obligación, la inscripción de “todo varón colombiano” y es aquí, donde pueden presentarse cuatro situaciones: la primera, una inscripción por parte de algunas mujeres transgénero por falta de información en lo concerniente al tema de definición de situación militar o por presión de autoridades del ejército que no tienen formación en la materia; la segunda, una no inscripción por temor a ser víctimas de atropellos o reclutamiento forzado; la tercera, un conocimiento suficiente en la materia por parte de algunas mujeres transgénero menores de edad, quienes se rehúsan a presentarse y a realizar las gestiones correspondientes a la primera inscripción por su condición de mujer transgénero menor de edad; y la cuarta, la exigencia de documentos que dejan las batidas, donde autoridades del ejército las reprenden por no realizar la correspondiente inscripción, puesto

que, el Ejército Nacional a través de su Jefatura de Reclutamiento (s.f.), dispone que “mientras aparezcan en su documento de identidad con género masculino, deben definir su situación militar porque así lo estipula la Ley” (p. 14).

El tema de la no inscripción de mujeres transgénero menores de edad, ha dejado como consecuencia en algunos casos que:

Quienes incumplan con la obligación de inscribirse para definir su situación militar pueden ser objeto de sanciones por parte de las autoridades militares que tras verificar si los ciudadanos se han inscrito o no pueden incluirlos dentro del sistema para que definan su situación militar. (Defensoría del Pueblo, 2014, p.21)

De igual manera, pueden presentarse casos en los cuales algunas mujeres transgénero, cumplen la mayoría de edad y es aquí donde el art. 14 de la Ley 48 de 1993, toma fuerza, pues el ejército compele de manera argumentada a los ciudadanos, sin tomar en cuenta el tránsito de género, teniendo en cuenta que, en su apartado segundo dispone que “cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente Ley” (p. 6), dando espacio a las denominadas batidas, que tienen como consecuencia detenciones arbitrarias de mujeres transgénero por no guardar apariencia de mujer o por no presentar un certificado de cambio de sexo en el registro civil. Estas batidas, llevadas a cabo por autoridades militares indebidamente capacitadas, dejan como consecuencia la falta de confianza en la institución ejército que pasa de su papel de garante al de agresor.

Para una mejor comprensión de la problemática vivida por las mujeres transgénero, debe plantearse el particular de la definición de su situación militar, sobre la base de las siguientes figuras, donde la misma toma protagonismo y directa afectación, estas son: situación de inscrito y remiso, la inadecuada aplicación del término compeler y quienes son objeto de

dicho término, la inadecuada interpretación normativa y la falta de información en materia de definición de situación militar para personas transgénero.

2.3.1 Situación de *inscrito y remiso*

En la actualidad, los hombres colombianos que hacen su tránsito a mujer, deben definir su situación militar al acercarse a la mayoría de edad, es este el momento donde múltiples interrogantes surgen, como por ejemplo: ¿Cómo definir la situación?, ¿Cuánto se debe pagar?, ¿Cómo puedo evadir la situación?; por esta razón, debe mirarse la condición de las mujeres transgénero de una manera cuidadosa, en lo concerniente a la definición de su situación militar, toda vez que, la misma, por su condición de mujer, no es receptora de la Ley de Reclutamiento, pues en algunas situaciones, como se ha planteado en el presente capítulo, las autoridades militares manifiestan la obligación de una inscripción “mientras aparezcan en su documento de identidad con género masculino” (Ejército Nacional-Oficina de Reclutamiento, s.f., p. 14), y es aquí, donde se ven afectadas algunas mujeres transgénero menores de edad, que cuentan con una identidad de hombre. Para dilucidar este problema, es conveniente ver en su conjunto la Norma de Reclutamiento, el Decreto 1227 de 2015 y, las sentencias T-476 de 2014 y T-099 de 2015, que en su conjunto conforman el cuerpo jurídico de la definición de situación militar en Colombia para personas transgénero. Visto desde estas ópticas, el deber de inscripción resulta menos difuso.

Es conveniente realizar un análisis para casos particulares, puesto que, si se hace de manera general, podría traer como consecuencia que algunas autoridades militares creen que la Ley de reclutamiento, debe aplicarse literalmente a través de su art. 14, el cual determina la obligación de todo varón para realizar la inscripción “dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad” (Ley 48, 1993, p. 6); desconociendo en primer lugar, la condición de las mujeres transgénero como mujeres y en segundo lugar, los preceptos

constitucionales y jurisprudenciales que nutren la materia. No es fácil abordar este problema, pues en la actualidad, Colombia no cuenta con una Ley que estipule de manera taxativa, que las mujeres transgénero menores de 18 años, no deben realizar la inscripción, lo cual deja este tipo de casos, únicamente a disposición de la interpretación que se haga a la luz de la normatividad vigente, decretos y sentencias.

En el mismo sentido, puede inferirse que en algunos casos, las mujeres transgénero mayores de edad, no muestran preocupación alguna por considerar no ser receptoras de la normatividad, debido a su condición de mujeres. Por ejemplo, muchas mujeres transgénero han dejado pasar años sin realizar trámite alguno para determinar su situación, quedando como no inscritas y teniendo que pagar por ende, multas acordes al tiempo de la no presentación. Pueden existir en Colombia casos en los cuales algunas mujeres transgénero se hayan presentado al correspondiente distrito y se hayan cumplido, en su mayoría, las etapas de la definición de su situación militar, tales como, la inscripción, el examen psicofísico, el segundo examen de actitud psicofísica, el tercer examen de actitud psicofísica, el sorteo y la cita de conscriptos; situación en la cual, sí se omite la cita, se declarará como remiso. La situación de remiso es más común en hombres cisgénero, que en hombres que hacen su tránsito a mujer, debido a que, los exámenes, en algunos casos, determinan la condición de mujer transgénero como *no apto*, dejando como consecuencia la cuota de compensación militar. Esta cuota de compensación, no puede llegar a confundirse con la multa por la no inscripción.

En ese orden de ideas, es pertinente aclarar que, la condición de inscrito y la de remiso, no pueden tomarse como similares, puesto que, el caer en esto, puede traer inadecuadas interpretaciones de quien podría ser objeto de reclutamiento. Para una mayor claridad en lo planteado, se puede ver la inscripción como ese primer momento de la definición de situación militar, en el que el joven *varón*, menor de 18 años, debe llevar a cabo. Para los hombres,

debe tomarse como una obligación y no como una mera invitación, pues el no hacerlo trae como consecuencia un direccionamiento al distrito por parte de las autoridades, para llevar a cabo una inscripción y “una sanción equivalente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente, por cada año que dejare pasar sin adelantar este trámite, en todo caso la sanción no podrá exceder de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes” (Ejército Nacional - Jefatura de reclutamiento, s.f., p. 18).

El no inscrito, en ningún momento puede ser reclutado al realizar dicho trámite; no se le puede retener por un largo período de tiempo. En esta etapa, no se presentan estudios a exenciones o prácticas de exámenes médicos que determinen si se es apto o no.

A diferencia de la situación de inscripción, como ya se había señalado “son remisos los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de reclutamiento” (Ejército Nacional - Jefatura de reclutamiento, s.f., p. 17).

Sobre esta condición, el Ejército Nacional si podrá compelerlos y proceder a su posible reclutamiento, puesto que, es una de las maneras en las que puede definir su situación militar. Por otra parte, el remiso puede presentar “exención legal mediante solicitud dirigida a la autoridad correspondiente, anexando los soportes o pruebas necesarias con el fin de que la Junta de Remisos tome la decisión” (Ejército Nacional - Jefatura de reclutamiento, s.f., p. 28).

Estas exenciones solo tienen procedencia si se ha realizado la inscripción dispuesta en el art. 14 de la Ley de Reclutamiento.

Es un tanto intrincado el panorama que ofrece la norma, teniendo en cuenta que, en la realidad se aplica de manera diferente incluso en hombres cisgénero, quienes tienen que afrontar una situación militar en un país con conflicto armado interno, siendo esta una de las principales causas por las cuales existe temor, en prestar el servicio militar. En el caso de las mujeres transgénero, pueden verse tres situaciones: la primera, una inscripción en mujeres

transgénero menores de edad, que por tener una identificación de hombre no pueden evadir dicho proceso; la segunda, una inscripción que va acompañada de los posteriores exámenes y una citación para concentración, a la cual algunas mujeres transgénero nunca asisten y son declaradas como remisos; y la tercera, las mujeres transgénero que surten todas las etapas para definición de su situación militar, prestan el servicio y ocultan el género deseado por temor a burlas u otros motivos.

2.3.2 Facultad de compeler

Compeler es el proceso que adelanta el ejército, a través de sus jefaturas, para llevar a cabo la definición de situación militar de hombres mayores de edad. En la aplicación de este proceso, la Defensoría del Pueblo (2014) puede ver con asombro cómo:

En el desarrollo de las compilaciones se conducen ciudadanos a cuarteles o distritos militares por largos periodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlos a inscribirse, sino de someterlos a exámenes, y si resultan aptos incorporarlos inmediatamente a las filas. (p. 22)

A su vez, “tienen como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de circulación, la libertad personal y el debido proceso” (Defensoría del Pueblo, 2014, p.22). A pesar de determinarse, que las mujeres transgénero no son objeto de la normativa que exige el servicio militar obligatorio para hombres, otra es la realidad de las mujeres transgénero, quienes en algunas ocasiones son objeto de requisas, burlas y ultrajes. Las mujeres transgénero son tratadas de manera violenta en compelaciones, por no guardar apariencia de mujer o no mostrar un cambio de sexo en su registro civil.

Como se señala en el informe de la Defensoría del Pueblo (2014), acerca del servicio militar obligatorio “la Corte Constitucional determinó el alcance de la facultad que tienen las autoridades militares para compeler a los ciudadanos y verificar su situación militar” (p.26).

En virtud de una demanda presentada en contra del artículo 14 de la Ley de reclutamiento “en el cual se faculta a las autoridades militares a realizar compilaciones o batidas” (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 26), fue como la Corte Constitucional a través de la sentencia C-879 de 2011 “declaró la exequibilidad de este artículo. Sin embargo, condicionó su aplicación a la interpretación que se haga de la expresión compeler” (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 26). En un mismo sentido, la (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2011), aclaró que para el hombre que no haya realizado la inscripción, el mismo: “solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere de ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción” (p. 8). De igual manera, la Corte Constitucional (2011) también establece que:

No puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos de tiempo con el propósito no solo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y si resulta apto finalmente incorporarlo a filas.

2.3.3 Etapas de la compelación y situación de las mujeres transgénero en el proceso de definición de situación militar en Colombia

El proceso de compeler, comprende una serie de etapas entre las cuales se pueden mencionar: primero, el requerimiento de presentación física de la libreta militar; segundo, una verificación del estado del ciudadano frente a la definición de su situación militar; tercero, un direccionamiento al distrito correspondiente para que se inscriba (en el caso de no estar inscrito) o para que se determine su situación militar, estudiando la viabilidad de incorporarlo dependiendo si cumple con los requisitos indispensables o no para su respectivo alistamiento; cuarto, un examen médico que determina la calidad de apto. Cumplido este requisito de

manera positiva, el joven es incorporado y pasa a ser parte de las filas. En caso de que el examen médico sea negativo, el joven no es incorporado a las filas del ejército.

En el proceso antes mencionado, puede verse inmersas las mujeres transgénero, quienes, si bien en el mejor de los casos, no son direccionadas a un sitio para que se inscriban por su condición de mujer, la misma puede ser objeto de ultrajes como tocamientos o burlas, fruto del empoderamiento y violencia por prejuicio de quienes llevan a cabo estas prácticas. Otro es el caso de las mujeres transgénero menores de edad, que no han realizado la inscripción y a su vez no presentan una apariencia de mujer en su totalidad, generando como consecuencia que dichas mujeres sean conducidas al cuartel o distrito militar, donde personal no calificado les sugiere continuar con los tramites de definición de situación militar, dejando como resultado en algunos casos la interposición de tutelas.

2.3.4 Avances y retrocesos

En materia de auto reconocimiento de las mujeres transgénero, el Ministerio del Interior y de Justicia, ha brindado la oportunidad del cambio del componente sexo en el registro civil por medio del Decreto 1227 de 2015. Tal logro fue alcanzando gracias a la colaboración con la comunidad trans, siendo motivo de felicitaciones por parte de la CIDH, como lo dispone en su informe Violencia Contra Personas LGBTI de 2015. El Decreto referido, ofrece a las mujeres trans, una oportunidad negada jurídicamente en Colombia desde el año de 1994, según lo cual, una persona intersex que nació con características de los dos sexos, fue operada por determinación médica, recibiendo la amputación de su órgano genital masculino, e identificándose tiempo después con un género masculino al exigir mediante acción de tutela el cambio de sexo en su documento de identidad. “la Registraduría se negó a cambiar el sexo de la persona en su documento de identidad alegando que el mismo sólo podía ser ordenado

por un juez” (Corte Constitucional de la República de Colombia, 2015). En el cuerpo mismo de la Sentencia T-504 de 1994 se plantea:

El sexo es un componente objetivo del estado civil que individualiza a la persona, pues como hecho jurídico no depende de la apreciación subjetiva de quien lo detenta, sino del carácter objetivo que tiene por ser un hecho de la naturaleza física. (Corte Constitucional, 1994)

Por su parte, el Decreto de cambio de sexo tuvo en su momento que enfrentar una demanda de nulidad, en la cual la parte accionante fue la Procuraduría, quien en su demanda consideró que el acto administrativo era nulo por ser el sexo regulado por un Decreto cuando al mismo lo determinan aspectos exclusivamente biológicos, planteamiento que a criterio de la entidad no podía estar supeditado por una declaración ante notario. Este tipo de situaciones plantean un retroceso en los avances de la comunidad trans, toda vez que, es el mismo Estado en cabeza de la Procuraduría, desconoce sus necesidades y el derecho a no vivir bajo una identidad no deseada. La procuraduría “teme que, una vez autorizado el cambio de identidad, personas trans puedan adoptar o celebrar matrimonios, en los mismos términos en los que hoy sólo pueden hacerlo las parejas heterosexuales” (Semana, 2015, párr. 8), y que las mujeres transgénero puedan eximirse de definir su situación militar.

Por otra parte, se puede ver la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, donde se estipula la “promoción de la vinculación laboral y normalización de la situación militar” (p. 4). Esta Ley, denota claramente una respuesta y una posición por parte del Congreso de la República, en lo concerniente a la definición de situación militar de los jóvenes colombianos, quienes a través de los años se han visto negativamente afectados al intentar acceder a un trabajo público o privado, por no contar con la libreta militar: un documento que en Colombia es necesario para situaciones, como “ejercer cargos públicos, trabajar en el sector privado, y

celebrar contratos de prestación de servicio como persona natural con cualquier entidad de derecho público” (Ley 1780, 2016, p. 6).

Adicionalmente, la (Ley 1780, 2016) establece “la reducción de la edad máxima de incorporación a las filas para prestación del servicio, la acreditación de la situación militar para el trabajo y las jornadas especiales” (p. 6). En los aportes mencionados, se puede ver que, en lo concerniente a la reducción de edad para prestar el servicio militar, esta es benéfica, puesto que, fija como límite de edad, los 24 años de edad. De otro lado, en lo concerniente a la acreditación de la situación militar provee dos aportes: el primero, es la no exigencia de libreta militar para acceder a un cargo público o privado (aporte positivo); y el segundo, es el establecimiento de un plazo máximo de 18 meses a partir de la fecha de vinculación laboral, para la definición del empleado de su situación militar. Se puede considerar lo último, como un aporte no del todo positivo, pues no considera la realidad social colombiana, donde los empleos no son en muchos casos estables y los empleadores incumplen las obligaciones de la relación laboral. El último aporte, tiene relación con las jornadas especiales llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene por objetivo “agilizar la definición de situación militar de los varones colombianos” (Ley 1780, 2016, p. 7). Cabe destacar que esto también representa un aporte negativo al no tomar en cuenta a las mujeres transgénero, que siguen siendo receptoras de una Ley de reclutamiento, por no contar con un cambio en el componente sexo en su registro civil o un nombre masculino en su cédula de ciudadanía.

Por último, debe reconocerse en palabras de (Butler, 2004) que “el género es una norma reguladora pero también una norma que se produce al servicio de otro tipo de reglamentos” (p. 84); la cual, para el presente caso, se interpretaría como una regulación normativa al caso de la identidad basada en un sexo consignado en documentos, que no permite la valoración de un auto reconocimiento, supeditando a las personas trans a una determinación

herteronormativa, por parte de los notarios que se niegan a realizar un cambio en el correspondiente registro civil, los policías que requisan y los agentes del Ejército, quienes interviene en el proceso de definición de la situación militar. En otras palabras, el transgénero debe surtir un roll heterosexual, para el reconocimiento de un derecho que debe ser reconocido por interpretación normativa y jurisprudencial abierta, no cerrada en el encasillamiento de un género hegemónico preponderantemente masculino, mezclado con tientes religiosos, así como actos y discursos prejuiciosos.

Al respecto, (Butler, 2004) afirma:

El género propio no se ‘hace’ en soledad. Siempre se está ‘haciendo’ con o para otro, aunque el otro sea sólo imaginario. Lo que se llama mi ‘propio’ género quizá aparece en ocasiones como algo que uno mismo crea o que, efectivamente, le pertenece. (p. 13)

3. Análisis de la realidad

3.1 ¿Hay una violación de derechos humanos en materia de la definición de la situación militar para mujeres transgénero?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido una clara y abierta preocupación derivada de las graves violaciones a los Derechos Humanos, de las cuales son víctimas los integrantes de la comunidad LGBTI. Dentro de esta comunidad, las mujeres transgénero colombianas enfrentan una posición crítica frente a la definición de situación militar, y aunque existen considerables avances en cuanto al reconocimiento del cambio de sexo en el Registro Civil y en la cédula de personas mayores de edad mediante el Decreto 1227 de 2015 como herramienta de reconocimiento social no es suficiente, debido a que la discriminación y violencia por prejuicio siguen estando presentes en quienes tienen apariencia de mujer y un documento que indica que el sexo es masculino.

La falta de recursos o la minoría de edad obstaculizan el proceso de cambio de sexo, dejando como consecuencia violaciones a Derechos Humanos ocasionadas por prácticas sistemáticas de reclutamiento. Esta cuestión es confirmada “por algunas respuestas institucionales, tal como lo dicen algunas de las personas participantes en el proceso: actores armados legales, como Policía, Ejército, Fiscalía, CTI y Procuraduría, en vez de ayudarnos generan más barreras y dificultades para superar estas situaciones” (Defensoría del Pueblo, 2015, p.24), dejando en evidencia una clara ‘violencia institucional’ que da como resultado la discriminación de manera sistemática en el medio. Por esta razón, es deber de cada Estado miembro de la OEA “la adopción de medidas para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar dicha violencia” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.16), a través de una legislación garantista y protectora de los derechos que asisten a las personas transgénero quienes han sido víctimas de la discriminación y la violencia por prejuicio familiar, social y estatal.

Teniendo en cuenta lo anterior, conviene retomar el concepto de *identidad de género* desde una lectura de los Principios de Yogyakarta. En este caso, el concepto introducido en el marco teórico debe partir de una interpretación teleológica de la norma y no de una literal, ya que se pueden llegar a vulnerar los Derechos Humanos de personas que se auto reconocen y son reconocidas como transgénero. Tal es el caso de la definición de situación militar para mujeres transgénero menores de edad en Colombia, ya que como se había planteado anteriormente, las mismas son objeto de atropellos por parte de los agentes del Ejército por no contar con el cambio de sexo en su registro civil de nacimiento o no guardar apariencia de mujer en su vestuario o cuerpo, sin tener en cuenta lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), la cual establece que “la identidad de género no la determinan las transformaciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos”(p.32).

Por esta razón, es indispensable la capacitación de los agentes del Ejército en materia de reclutamiento, toda vez que por desconocimiento de la materia se puede llegar a interpretaciones literales como la de ‘todo varón’ del art. 10 de la Ley 48 de 1993, interpretación argumentada por la institución Ejército que de manera literal observa el componente de sexo en los documentos (registro civil y cédula), olvidando el auto reconocimiento y reconocimiento de la persona, el cual va más allá de un documento. Esta situación afecta a algunas mujeres transgénero que no han hecho la modificación del apartado sexo en sus documentos de identidad por falta de recursos, o a las mujeres transgénero menores de edad que no pueden acceder a un cambio de sexo por no contar con la mayoría de edad y que desconocen que el solo reconocimiento como personas transgénero ya las hace mujeres acreedoras a determinados derechos.

Esto permite que muchas de estas mujeres trans menores de edad acudan a la primera citación, sin que el personal calificado les explique que por ser mujeres transgénero, no son receptoras de dicha normatividad tal y como los dispone la Corte Constitucional en su Sentencia T-099 de 2015 por un auto reconocimiento y reconocimiento de la condición de mujer. En algunas ocasiones, personal no calificado del Ejército puede confundir a algunas mujeres transgénero con hombres homosexuales, mezclando la identidad de género diversa con la orientación sexual. Por ende, estas personas pueden llegar a ser objeto de prácticas sistemáticas de reclutamiento y ser valoradas por personal masculino sin preparación en temas de género, llegando así a detenciones arbitrarias, requisas injustificadas, injerencias arbitrarias en la vida privada, restricción de la libertad de expresión y actos tendientes a la supresión de derechos de las mujeres transgénero.

La definición de situación militar de mujeres transgénero no es un tema fácil, ya que presenta múltiples falencias e interrogantes que tocan al Estado en cabeza del Ministerio de Defensa, y de la institución Ejército. Por esta razón, “los Estados tienen la obligación de

adoptar medidas para proteger y dar respuesta ante las formas de violencia dirigidas contra personas LGBT, como una consecuencia directa del principio de no discriminación” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003, p.71), a través de leyes, resoluciones, protocolos institucionales, grupos de trabajo y capacitaciones a los integrantes del Ejército.

La voluntad y el intento por una comprensión del tema, son base para el respeto y reconocimiento (dignidad humana), elementos esenciales a la luz de los cuales se evalúe la definición de la situación militar cuando se identifique la presencia de una mujer transgénero, ya que la misma no es receptora de la Ley de Reclutamiento por su condición de mujer, y que la misma no debe su condición de mujer al cambio de sexo en su registro o cédula de ciudadanía, tal y como algunos funcionarios del Ejército aún creen, ya que consideran que la condición de mujer transgénero la otorga un documento con nombre femenino, y no el auto reconocimiento de la persona, que muestra a la sociedad su condición de mujer de manera abierta. El Ejército colombiano ha determinado que mientras se conserve una identidad de hombre en registro o cedula, su poseedor debe seguir el proceso de definición de su situación militar, dejando atrás el auto reconocimiento y dignidad humana de las mujeres transgénero, quienes no desea cambiar su nombre en documentos o que aún no pueden hacerlo por no cumplir la mayoría de edad que exige el Decreto de cambio de sexo. Así, son víctimas de agentes que desconocen su condición de mujeres por no estar capacitados en la temática de género, para dar una aplicación adecuada del Art. 10 de la Ley de Reclutamiento.

Esta norma tiene como objeto la obligatoriedad de definición de situación militar para hombres, pero no para mujeres de las cuales hacen parte las mujeres transgénero, sin importar si la misma figura como *Andrés* o *Andrea*. Cabe mencionar que el término “*todo varón*” desde el punto de vista del género en sentido amplio y no *heteronormativo*, hace alusión a quien se auto reconoce como tal. Sobre este punto cabría la posibilidad de que quien se auto

reconoce como hombre transgénero pueda hacer parte de la institución Ejército, sin temer a no ser aceptado por su tránsito de género, o por su componente femenino en sus documentos de identidad. Debe reconocerse que la ley es cambiante, y la misma debe ajustarse e interpretarse conforme a las necesidades de la sociedad contemporánea, abriendo campo a la interpretación teológica que busca el fin normativo, y no se limita sólo a su mera literalidad desconociendo la dignidad humana que es inherente a cada persona.

En línea con lo anterior, los defensores de los Derechos Humanos son un puente comunicante en el proceso de definición de la situación militar de las mujeres transgénero, ya que difunden la información adecuada y efectiva para la defensa de los derechos que asisten a la comunidad de mujeres transgénero, agobiadas por un proceso del cual deben ser objeto únicamente los hombres. En consecuencia, la labor de los defensores cobra relevancia en los procesos que surgen frente a la institución del Ejército, en lo concerniente a las mujeres transgénero, pues permiten una visión objetiva de la situación, partiendo de los derechos que asisten a la persona, y reforzándolos en relación con su condición. Toman como sustento la dignidad humana, que no puede ser desconocida en cualquier proceso llevado a cabo por dicha institución. “Las defensoras y los defensores de Derechos Humanos que defienden los derechos de personas LGBTI enfrentan serios desafíos para realizar su trabajo, incluyendo amenazas, ataques, y la criminalización de sus actividades” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.198). Éstas se ven afectadas por quienes ejercen violencia por prejuicio.

El papel del defensor de Derechos Humanos en el proceso de definición de situación de mujeres trans es identificar la condición de cada una, ya que en algunas ocasiones algunas mujeres transgénero puede tener condiciones de discapacitada, desplazada, afro descendiente, indígena, pobreza o de menor de edad, adquiriendo una protección doblemente reforzada como mujer y como parte de una población vulnerable. “La Comisión ha expresado su

preocupación sobre la vulnerabilidad especial de las mujeres afro descendientes, quienes han sufrido una triple discriminación histórica en base de su sexo y género, pobreza extrema y raza.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.211).

Tal Discriminación, se intensifica por su orientación sexual o representación de género diversa, creando en la comunidad LGBTI un mensaje de rechazo impregnado de prejuicios, en un país como Colombia donde el rechazo y la violencia por prejuicios hacen eco en el discurso *heteronormativos* y religiosos de cualquier tipo, permeando las esferas familiares, escolares, estatales y de grupos insurgentes al margen de la ley.

3.2 La inadecuada interpretación normativa

La inadecuada interpretación normativa es, sin duda, una de las principales problemáticas, y quizás la causa fundamental de los múltiples atropellos de los cuales son víctimas las mujeres transgénero. Como se ha mencionado a lo largo de esta investigación, la institución Ejército a través de las autoridades militares parece tener una visión muy ajustada y literal del artículo 10 de la Ley 48 de 1993 y del término *compelación* antes expuesto, desconociendo el amplio panorama interpretativo en materia de Decretos, jurisprudencias e informes por parte de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, material que deja una visión holística de la garantía de los Derechos Humanos (DD.HH) de las mujeres transgénero.

Para el desarrollo del presente trabajo es importante analizar la pertinencia sobre la exigencia de la libreta militar de modo obligatorio, con fines de contratación laboral y de obtención de un título de pregrado, ya que dibujan situaciones que, con más frecuencia, enfrenta la sociedad actual. Es clara la regulación normativa optimista al respecto, pero es también cada vez menos clara su interpretación y debida aplicación. Ello permite ver que, en algunos casos, se exija el mencionado documento cuando las decisiones judiciales y

disposiciones normativas disponen lo contrario. Así, por medio de la sentencia de tutela T 476 de 2014 la Corte Constitucional Colombiana (2014) exhorta:

La Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en los futuros procesos de selección y contratación en los que participen personas transgeneristas inaplique el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es decir, no se les podrá exigir la libreta militar como requisito para su vinculación mediante nombramiento o contrato de prestación de servicios.

De lo anterior, el presente estudio plantea una inadecuada lectura normativa del artículo 36 de la Ley de Reclutamiento, que en algunas ocasiones suele interpretarse de manera literal desconociendo el carácter cambiante de la norma a través del tiempo, la cual además, a la luz del caso en cuestión, ha dejado como consecuencia la exigencia de la libreta militar en el sector privado y público, obviando que el artículo mencionado fue modificado durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano, por el Decreto 2150 de 1995 en el cual “se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. A su vez, en el Art. 111 establece que “las entidades públicas o privadas no podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndole a éstas la verificación del cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente” (Presidencia de la República, 1995, Art. 111). Dentro de estos casos se puede encontrar la celebración de contratos con entidad pública, el interés por vincularse a la carrera administrativa, la posesión de una persona en cargo público y por último, “obtener grado profesional en cualquier centro docente de educación superior” (Presidencia de la República, 1995). Esta última disposición generalmente es aplicada literalmente por algunas instituciones educativas, que desconocen la Ley 1738 de 2014 que en su art. 2 estipula la no exigencia de presentación de libreta militar para obtener el título de pregrado.

En concordancia con lo anterior, es importante afirmar que las mujeres transgénero no deben ser receptoras de las exigencias mencionadas anteriormente como consecuencia de la falta de definición de su situación militar, ya que las mismas son dirigidas a hombres y no a mujeres. Sin embargo, cabe cuestionarse, ¿es necesaria la creación de una Ley que determine la condición de las mujeres transgénero desde el momento de su auto aceptación, y no sólo cuando se somete a una cirugía o cuando cumple 18 años?, pues en algunas situaciones como en el caso del Decreto 1227 de 2015 se muestra una clara preocupación por dotar a las mujeres transgénero mayores de edad del beneficio de corrección de sexo en el registro civil, olvidando a las mujeres transgénero menores de 18 años que se ven afectadas por los intempestivos requerimientos del Ejército para realizar su primera inscripción, dejando de lado que las mujeres transgénero deben reconocerse en todo momento desde su aceptación y transito al género elegido y no desde su cambio en el apartado de sexo en su correspondiente registro.

Cabe anotar que una interpretación de carácter literal en la Ley de Reclutamiento, no es la más indicada, toda vez que no ofrece un campo de análisis amplio, dejando como resultado discrepancias e interpretaciones erróneas y desconociendo de paso la interpretación teleológica, la cual ofrece un entendimiento acerca del fin para el cual fue creada dicha Ley.

En lo concerniente a definición de situación militar de personas trans, puede verse una clara confusión por parte de la institución Ejército y la ciudadanía, de la cual hace parte el hombre que se auto reconoce, y no es reconocido como mujer (transexual o transgénero), o personas quienes no se consideran ni hombre ni mujer, y pueden tener una apariencia andrógina, absteniéndose de ser receptores de la Ley de Reclutamiento (*gender queer*) (Ver *Figura 4*, en Anexos).

Estas personas se han visto afectadas por los requerimientos estipulados en la Ley de Reclutamiento. Por tal razón, la Corte Constitucional colombiana ha ratificado a través de su

reciente jurisprudencia que las mujeres trans no son receptoras de dicha normativa. Un ejemplo de ello es la sentencia T 476 de 2014 que establece la inaplicabilidad del Art. 36 de la Ley de Reclutamiento, al instar a la Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá para que:

En los futuros procesos de selección y contratación en los que participen personas transgenerista, inaplique el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es decir, no se les podrá exigir la libreta militar como requisito para su vinculación mediante nombramiento o contrato de prestación de servicios. (Corte Constitucional, 2014)

En este punto resolutivo la Corte se refiere a las mujeres transgénero en cierto caso específico, este es el del Art. 30 de la Ley de Reclutamiento que establece la tarjeta de reservista, la cual no es cosa distinta que un documento para determinar que ha definido la situación militar. ¿Qué quiso exponer la Corte? ¿Sólo para mujeres transgénero? ¿Qué ocurre con las mujeres transexuales? La sentencia antes referida tomó en cuenta únicamente a las mujeres transgénero y no un todo; es decir, las mujeres trans, problema que sería aclarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T 099 de 2015: “este precedente que establece que las mujeres transexuales que se auto referencian como tales, no son destinatarias de las normas que regulan el servicio militar obligatorio en Colombia”. En un mismo sentido, la Corte determina que las mujeres transgénero no son receptoras de la Ley de Reclutamiento militar, y que:

Del mismo modo, deberá incluirse un mecanismo para el reclutamiento de los hombres transexuales que puedan ser sujetos de la Ley 48 de 1993 y deberá considerarse la posibilidad de que las mujeres transexuales gocen de garantías suficientes para prestar el servicio militar, cuando voluntariamente lo decidan, tal como les es permitido por la Ley. (Corte Constitucional, 2015)

Este aporte tuvo como principal objetivo dar las mínimas garantías de las mujeres cisgénero a las mujeres trans (transgénero o transexual), que no quiera o desee hacer parte de

las fuerzas militares de manera voluntaria, tal y como lo dispone la Ley de Reclutamiento colombiana en un servicio militar voluntario. El problema parece resuelto a simple vista, pero no es así, ya que se ha podido ver dificultades en la interpretación jurisprudencial aportada por el alto tribunal por parte del Ejército, ciudadanía y medios de comunicación. La falta de información en lo concerniente a la definición de la situación militar para mujeres transgénero es una de las principales causas de los múltiples atropellos por parte de los integrantes del Ejército, cuya responsabilidad radica precisamente en proporcionar información veraz y fidedigna al conglomerado. Debido a esto, la referida Subdirección de Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá, buscó apoyo a través de la creación de la Unidad Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (UCD), la cual lucha en oposición a todas las formas de violencia en contra de las personas pertenecientes al conglomerado LGBT. Gracias al apoyo de la UDC en el campo de asesoramiento para asuntos legales y los últimos aportes en sentencias de tutela T476 de 2014 y T099 de 2015, las mujeres transgénero colombianas cuentan con herramientas para hacer valer sus derechos en lo relacionado con la definición de situación militar y con la exigencia infundada por parte de algunas entidades de su libreta militar.

Generalmente el grupo de mujeres transgénero que conoce en la actualidad a la UDC y a las sentencias antes descritas, son aquellas que han tenido algún tipo de acercamiento con la definición de su situación militar, o han sido víctimas de atropellos por parte del Ejército y la policía debido a la exigencia de libreta militar, o se han relacionado con ONGs o con centros de atención a población LGBTI, donde personal calificado indica el marco y los parámetros a seguir en lo concerniente a definición de situación militar y otros temas relacionados con la prevención de violación de derechos.

Es aconsejable en el proceso de citación para la inscripción con miras a definir su situación militar, que las mujeres transgénero menores de 18 años, busquen asesoría con

entidades competentes en el tema. Tal es el caso de la Defensoría del Pueblo o centros de apoyo a la comunidad transgénero, donde se brinda la información del caso, sin que la menor corra el riesgo de ser abordada por las autoridades del Ejército de manera inesperada.

3.3 La Violencia por prejuicio

La construcción de estereotipos en la sociedad es un punto de apoyo que sirve como justificación al momento en el cual un individuo (civil o agente del Ejército) ejerce violencia contra otro y que al ser direccionada hacia las mujeres transgénero no se ve como una simple violencia, si no como una violencia por prejuicio que toma como base la discriminación al ver el tránsito de estas mujeres como algo anormal frente a unos parámetros socialmente establecidos.

La violencia por prejuicio toma como sustento un gran número de elementos, entre ellos el aspecto sociocultural y socioeconómico, los cuales dan cabida a un prejuicio aprendido y grabado y funcionan como excusa para que el individuo agresor cometa actos de violencia. Son prejuicios en la medida en la que el individuo cree que determinados actos van en contra de lo que él considera normal o bueno y que en algunas ocasiones incluso cuentan con la aprobación de la sociedad. Un ejemplo de ello, puede ser el agredir una mujer transgénero para que salga de un restaurante donde hay niños por considerar que es un mal ejemplo para la sociedad, contando con el apoyo de sus padres, los clientes del restaurante y el administrador. En este ejemplo, se ve claramente que la agresión fue cometida y la misma estuvo fundada en la educación que recibió el agresor en su entorno. Por otro lado, se evidencia el apoyo que los presentes en el establecimiento dieron al agresor, es decir, no recibió ningún reproche por la agresión, ni fue denunciado por el acto cometido.

La CIDH considera que el concepto de violencia por prejuicio resulta útil para comprender que la violencia contra las personas LGBT es el resultado de percepciones negativas basadas

en generalizaciones falsas, así como en reacciones negativas a situaciones que son ajenas a las nuestras. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.48)

En la realidad tal y como dispone la CIDH (2015): “Es difícil determinar cuándo los actos de violencia contra las personas LGBT son motivados por el prejuicio. Tal determinación requiere una investigación exhaustiva de las razones que motivaron la violencia, llevada a cabo en cumplimiento del deber de debida diligencia” (p.48), la cual deben emplear los funcionarios de la Fiscalía en denuncias relacionadas con lesiones personales, hurtos, violencia sexual, etc., tomando como fundamento la dignidad humana de las mujeres transgénero que se ven comprometidas en los procesos de definición de situación militar por agentes del Ejército. Estos funcionarios creen estar respaldados por la Ley de definición de situación militar y más específicamente, por el término ‘todo varón’, dando como resultado la valoración errada del carácter binario del género que la sociedad encasilla en femenino y masculino, siendo las mujeres transgénero receptoras de estigmas por no ajustarse a la heteronormatividad imperante que ve como anormal el tránsito entre géneros.

Al hablar de violencia en contra de las mujeres transgénero es conveniente hacerlo desde la violencia por prejuicio y no de la violencia acaecida por odio o transfobia, ya que estos conceptos tienen características diferentes. En el caso de la violencia por odio esta se puede dar en contra de cualquier individuo que no sea transgenerista, teniendo como base un odio enfocado en el género, como en el caso de la misoginia. En el caso de la transfobia, tampoco puede determinarse que un ataque a una persona transgénero sea causado por un temor o aversión que el mismo componente de género le cause al agresor, es decir, hacen falta más elementos, que para la presente investigación, sí satisfacen lo que se denomina como violencia por prejuicio.

Al determinar los actos de violencia por prejuicio de los que pueden ser objeto las mujeres transgénero, debe establecerse que la violencia que se presenta en contra de estas mujeres,

tiene su razón de ser en los aspectos socioeconómicos y socioculturales característicos de cada región del país, donde prima la heteronormatividad con un fuerte elemento patriarcal dominante que desdibuja la igualdad entre géneros y que deja como consecuencia la dominación, humillación, dependencia y violencia hacia el género dominado, que para el presente caso es el género femenino, del cual hacen parte las mujeres transgénero colombianas que día a día se ven afectadas por llevar a cabo un tránsito de género y su condición de mujeres.

En algunos países aún existen Leyes que apoyan e incentivan la discriminación hacia las personas trans. Un ejemplo de ello es la Guyana, la cual “posee legislación que criminaliza el uso de prendas de vestir socialmente atribuidas a otro género (*cross-dressing*)” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.65), que de conformidad a lo dispuesto por la CIDH (2015), es una disposición que “refuerza los estereotipos de género y constituye discriminación sobre la base de la identidad y la expresión de género”(p.66), convirtiéndose la misma en una generadora de discriminación hacia la persona que desea hacer un tránsito de género.

En Colombia no existe una ley o determinación judicial que prohíba a las personas vestir de acuerdo al género elegido, pero sí existe un estigma social por parte de la comunidad que lleva al individuo agresor a exteriorizar todo tipo de violencia de género dejando como consecuencia el menoscabo de derechos. Dicha violencia de género se puede presentar en agresiones físicas, agresiones verbales, amenazas y en algunas ocasiones agresiones sexuales, que pueden ir desde un ligero tocamiento hasta la penetración de cualquier índole. Este tipo de violencia se evidencia notablemente por parte del Estado, en instituciones como el Ejército, donde el aparato ideológico se encuentra fuertemente marcado en torno al género, ya que el género masculino se caracteriza por virtudes como la de “ser Soldados Profesionales del Ejército Nacional bajo la premisa de ser integrales con principios, valores y

un código de honor, que nos hace sentirnos orgullosos de ser Hombres capaces de enfrentar y ganar la guerra, con Honor, disciplina y valentía” (Ejército Nacional de Colombia, 2016, párr. 15), valores que puede tener cualquier persona, y no un género en particular, transformándose así en un discurso que refuerzan los estereotipos de género y discriminación.

El miedo que se infunde en la comunidad de mujeres transgénero con este tipo de enunciados, genera temor colectivo entre las menores de edad, quienes por su condición, se hacen acreedoras a citaciones y procesos, al no contar con el componente que especifica el género femenino en sus documentos de identidad, debido a la minoría de edad, llegando el Ejército a la aplicación literal y no teleológica al art. 10 de la Ley de reclutamiento como ya se había referido en el presente trabajo, mientras es el reconocimiento y auto reconocimiento de su condición como mujer transgénero dispuesto en la Sentencia T-099 de 2015, el que las hace no ser receptoras del término ‘todo varón’, y otras disposiciones de la Ley de reclutamiento dirigidas a los hombres. En este sentido, algunas mujeres transgénero son receptoras de violencia por prejuicio, al verse involucradas en procesos de definición de su situación militar, a los cuales no deberían ser compelidas.

De lo anterior, se deduce que es necesario que la institución del Ejército esté adecuadamente capacitada para cualquier caso en el que se vea vinculada una persona trans (transgénero o transexual) que se presente dentro del proceso de reclutamiento militar, habilitando personal calificado con enfoque de género para que atienda los requerimientos de la comunidad trans, con una perspectiva amplia en pro de la persona y sus necesidades, sin determinar de manera arbitraria los procedimientos a los que debe ajustarse por guardar un componente de sexo masculino en sus documentos de identificación, dejando de lado el auto reconocimiento y reconocimiento de las mujeres transgénero más allá de un atuendo. En este sentido, la exigencia de cambio de sexo en los documentos se torna innecesaria.

Se concluye que algunos casos de discriminación y atropellos impartidos por agentes del Ejército hacia mujeres transgénero en el proceso de definición de situación militar, no llegan a ser denunciados por el temor que infunda la institución Ejército. En otros casos por no tener el conocimiento acerca de cómo denunciar o en algunas ocasiones por desconocer que se fue objeto de violencia. La integridad personal de las mujeres trans es blanco de ataque al verlas de una manera equivocada, es decir, como hombres que juegan a disfrazarse de mujeres y que tiene amaneramientos no permitidos en una heteronormatividad hermética y cuadriculada, preponderante y propia de una sociedad machista.

De acuerdo a lo referido por la CIDH en el informe Violencia contra personas LGBTI de 2015, la misma ha referido:

Según un reciente informe emitido por la UNESCO que estudió las distintas definiciones de discurso del odio en el derecho internacional, el concepto con frecuencia se refiere a “expresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia), con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.145)

Para el presente caso es la comunidad LGBTI de la cual son parte las mujeres transgénero colombianas, las cuales día a día han visto menoscabados sus derechos a la integridad personal y a la libertad de expresión por parte de altas autoridades del Estado.

Un claro ejemplo de lo anterior radica en que las “Organizaciones de la sociedad civil colombiana han denunciado que el Exprocurador General ha expresado públicamente visiones negativas y denigrantes de las personas LGBT, por ejemplo, considerando las relaciones entre parejas del mismo sexo como ‘aberraciones’ y equiparándolas con el bestialismo”. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.155).

A su juicio, la norma es ilegal porque desconoce cuáles son las exigencias de la Ley para identificar el sexo de los ciudadanos. Según él, esta identidad se debe definir biológicamente y no a partir de la convicción de género del solicitante.” (Revista Semana, 2015, párr. 3).

Según el mismo funcionario, citado en la Sentencia C 066 de 2016:

La Corte Constitucional no está obligada a restringir la libertad de configuración del Legislador incluyendo como beneficiarios de la excepción prevista en la Ley, a un determinado grupo de personas que únicamente por sus propias consideraciones y preferencias subjetivas se consideran excluidas o ajenas al criterio de distinción utilizado en las normas demandadas que se encuentran en perfecta armonía con el ordenamiento jurídico superior. (p. 23)

Estos discursos que refuerzan el estigma y discriminación de la que han sido receptoras las personas de la comunidad LGBTI. Por esta razón, el Estado colombiano es el encargado como garante de derechos de hacer el llamado correspondiente a sus funcionarios, ya que según lo dispuesto por la ley y como lo dice la CIDH, “los Estados deben adoptar las medidas disciplinarias adecuadas respecto del discurso de odio o la incitación a la violencia cometidos por funcionarios públicos.” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p.162), ya que muchos de estos discursos no sólo invitan al odio hacia una parte de la población, sino que también deshumaniza a sus integrantes, mostrando una superioridad del discurso heteronormativo sobre los Derechos Humanos de una comunidad que se ha visto afectada a través de la historia por la violencia. De igual manera, debe destacarse que son los medios informativos tales como la televisión, la radio, los periódicos y las revistas de cada Estado, pieza fundamental en el proceso de elaboración de discursos de odio, ya que los mismos pueden intensificarlos y abordados de una manera inadecuada.

Es este el motivo por el cual:

Los medios deben jugar un rol positivo en la lucha contra la discriminación, los estereotipos, los prejuicios y los sesgos, adhiriéndose a los estándares profesionales y éticos más altos, abordando asuntos de preocupación para grupos sometidos a discriminación histórica (incluyendo personas LGBTI), y ofreciendo a los miembros de estos grupos una oportunidad para hablar y ser escuchados. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 161)

4. Conclusiones y recomendaciones

En el presente trabajo se pudo comprobar una clara y abierta vulneración a los derechos humanos de mujeres transgénero que se ven vinculadas en el proceso de definición de situación militar basada en la discriminación. A tal punto de darse la materialización de una violencia por prejuicio.

Las mujeres transgénero, han sido y continúan siendo víctimas de violaciones a Derechos Humanos por parte de las autoridades, en el proceso de definición de su situación militar, lo que muestra una imperiosa necesidad de generar los canales de construcción y difusión de mecanismos legales e institucionales, que apuesten por la protección de los Derechos Humanos de los cuales es sujeto todo ciudadano colombiano. En relación con ello, debe establecerse que la modificación del componente sexo en el documento de identidad, no es la única herramienta para determinar la condición de las mujeres transgénero, ya que aun cuando dicho cambio en el componente sexo no se cumpla, continúan siendo sujetos de derecho de los cuales goza y de cuya protección es garante el Estado colombiano a través de sus obligaciones. Así lo reitera, no sólo la Constitución Política Nacional; también lo hacen los organismos internacionales quienes se han pronunciado al respecto, a través de sus diversos instrumentos. El esclarecimiento, el desarrollo y la difusión de un marco no

heteronormativo, continúa siendo una tarea por cumplir a cabalidad, por parte del Estado y la sociedad. Ello, tanto en el ámbito público de sus instituciones, como del privado, y las fronteras que entre uno y otro se dibujan, por ejemplo, al ser la libreta militar exigida en determinadas situaciones donde ya no es requerida.

Así, a pesar de existir aportes garantistas por parte de la Corte Constitucional en sus sentencias T476/14 y T099/15, que contribuyen a la comprensión de la definición de situación Militar, estas no son interpretadas de manera adecuada por los integrantes del Ejército, lo cual trae por consecuencia el no reconocimiento de la mujer transgénero como mujer, sometiéndola indiferenciadamente a procesos de los cuales son objeto los hombres. Es importante determinar que la identidad del ser humano trasciende el ámbito puramente biológico, ya que es una construcción libre que reúne áreas tan diversas como lo social y lo psicológico, a partir de las cuales se construye la identidad del género: en ella intervienen las dimensiones subjetivas y objetivas del ser. Es una decisión donde se es cuanto se desea ser, y debe ello ratificarse en las relaciones de alteridad, y las relaciones con los otros y el entorno.

Es relevante señalar que, al contexto descrito, se suman dificultades en el cambio del ítem sexo dentro del documento de identidad de las mujeres transgénero, dadas por variables tan diversas y exógenas a tal derecho, como la falta de voluntad por parte de las autoridades notariales, agentes del ejército, representantes del Estado o discursos heteronormativos evidenciados por la sentencia C 066 de 2016. También se puede determinar, que muchas de las mujeres quienes ingresan al proceso de definición de su situación militar o reclutamiento, no han cumplido la mayoría de edad y, por lo tanto, no se encuentran aún provistas del derecho para cambiar de sexo en su documento de identidad, lo que trae como consecuencia una violencia que toma como base el prejuicio.

De esta forma, existe la necesidad de una Ley al respecto, puesto que, la jurisprudencia aportada por la Corte Constitucional no es suficiente, para una adecuada interpretación, de las

autoridades militares encargadas de los procesos de definición de situación militar, quedando planteamientos anclados al término *todo varón*. De igual manera, se pudo evidenciar la necesidad de que dicha Ley, enuncie el servicio militar no obligatorio para la comunidad trans, y que las mujeres trans (sean transgénero o transexual) no sean receptoras de la Ley de Reclutamiento, en tanto que, hasta el momento, para determinar dicho planteamiento, se debe recurrir a la jurisprudencia del caso Grace Kelly y Ginna Hoyos y dos sentencias constitucionales de 2016, fruto de dos demandas contra la Ley 48 de 1993, que funcionarios del ejército no manejan y no aplican en el proceso de definición de situación militar. De acuerdo a lo anterior, se ve la necesidad de estipulación de un servicio voluntario para personas trans, donde se encuentra el hombre trans, que desea hacer parte de la institución Ejército.

En algunas ocasiones, las mujeres que son objeto de la definición de su situación militar cuentan con protección reforzada. Dentro de lo analizado en el presente escrito, es importante resaltar el caso de las mujeres transgénero que tienen condición de discapacidad, son indígenas, sufren condiciones de pobreza quienes, con sus condiciones específicas que merecerían ser objeto de futuros análisis adicionales, se suman a las menores de edad. Ellas se ven vinculadas como cualquier hombre que se auto reconoce y quiere definir su situación militar. Las mujeres con condición especial, deben recibir un acompañamiento especial de asesoría por personal capacitado en género, asistencia psicológica y trabajo social, que ayude en los procesos de retroalimentación de la institución Ejército y expliquen a las mujeres transgénero por qué no están obligadas a hacer parte de dicho proceso (ver *Figura 5*, en Anexos).

En consideración a lo expuesto, es aconsejable que, para la definición de la situación militar de las mujeres transgénero en Colombia, se dé cabida a la solicitud de una audiencia

temática ante el sistema interamericano, con el fin de hallar soluciones acordes a la situación que enfrentan.

Adicionalmente, conviene hacer un llamado al Congreso de la República (rama legislativa), para que cree el cuerpo de Leyes pertinente y regulatorio en la materia, según como lo ha dispuesto la Corte Constitucional, dando cabida a la evolución normativa que merece la definición de la situación militar en personas trans, de las cuales hace parte las mujeres transgénero, que desean cambiar o no su componente sexo o nombre.

3 Anexos

Anexo 1. Figura 1 – Identidad de Género y orientación sexual, Mujer

Fuente: elaboración propia

Anexo 2. Figura 2 – Identidad de Género y orientación sexual, Hombre

Fuente: elaboración propia

Anexo 3. Figura 3 – Identidades de Género en personas intersexuales

Fuente: elaboración propia

Anexo 4. Figura 4 – Identidades de Género (*Genderqueer*)

Fuente: elaboración propia

Anexo 5. Figura 5 – Mujer Transgénero (protección reforzada)

Fuente: elaboración propia

Anexo 6. Fotografía 1 Persona Queer en exigencia de sus derechos (Marcha LGBTI Bogotá 2016)

Fuente: Marco Ruiz

Anexo 7. Fotografía 2. Personas *Queer* en exigencia de sus derechos (Marcha LGBTI Bogotá 2016)

Fuente: Marco Ruiz.

Anexo 8. Fotografía 3 Hombre transformación a *drag_queen*.

Fuente: Marco Ruiz.

Anexo 9. Fotografía 4. Mujer transgénero en la marcha LGBTI Bogotá 2016

Fuente: Marco Ruiz

Anexo 10. Fotografía 5 mujeres trans en la marcha LGBTI Bogotá 2016

Fuente: Marco Ruiz

Anexo 11. Entrevista a mujeres transgénero frente a la definición de situación militar

Fecha: _____

Perfil del entrevistado:

Nombre: _____

Edad: _____ Género: _____ Estudios: _____

Ocupación actual: _____

Entrevistador: _____

Fecha: _____

Perfil del entrevistado:

Nombre: _____

Edad: _____ Género: _____ Estudios: _____

Ocupación actual: _____

Entrevistador: _____

Fecha: _____

Perfil del entrevistado:

Nombre: _____

Edad: _____ Género: _____ Estudios: _____

Ocupación actual: _____

Entrevistador: _____

El propósito de la siguiente entrevista es recopilar información acerca de la problemática que enfrentan las personas transgénero en Bogotá, al definir su situación militar, y las consecuencias que afrontan al no realizar dicho procedimiento.

1. ¿Qué entiende usted por definición de situación militar en personas transgénero?

Se pudo evidenciar por parte de las entrevistadas, que entienden que el proceso de definición militar hace referencia a si se debe o no prestar el servicio de manera obligatoria. En un mismo sentido consideran que no debe existir obligatoriedad al definir la situación en el caso de las mujeres transgénero, teniendo como base los planteamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, y su condición de mujer.

2. ¿Cómo cree usted que debería llevarse a cabo el proceso de definición de la situación militar de personas transgénero?

Se pudo determinar a través de las entrevistadas, que el proceso de definición militar en personas transgénero, debe llevarse a cabo por personal calificado quien explique a la persona

transgénero su situación, determinando que las mujeres no son receptoras de dicha normatividad

3. ¿Cuál cree usted que puede ser el motivo del temor que experimentan las personas transgénero al querer definir su situación militar?

Se evidencia por parte de las entrevistadas que las mujeres transgénero presentan maltratos y ultrajes por parte de la policía y el ejército en la exigencia de cédulas, libretas militares, escritura de cambio en el componente sexo, y procesos de definición de situación militar, momentos cuando se ven significativamente afectadas las mujeres menores de edad, quienes guardan en sus documentos de identidad el sexo *hombre* por no contar con la mayoría de edad que exige el decreto de cambio de sexo, y se ven obligadas a hacer parte en el proceso de definición de situación militar. En las mujeres transgénero mayores de edad, se pueden ver agresiones verbales y físicas, en las cuales se llega a golpes y tocamientos. En algunos casos estas mujeres no ven la necesidad del cambio de nombre o cambio de sexo en el registro civil, por considerar que tales cambios no determinan su condición de mujer. En otros casos no cuentan con los recursos para el cambio de sexo en su registro civil: “antes de los 18 años de edad, pueden vulnerar nuestros derechos como quieran”.

4. ¿Ha sido usted víctima de agresiones por parte del ejército en batidas y requisas?

Se evidencia por parte de las entrevistadas que las mujeres transgénero presentan maltratos y ultrajes por parte de la policía y el ejército, en la exigencia de cedulas, libretas militares, escritura de cambio en el componente *sexo*, y procesos de definición de su situación militar, instantes cuando se ven significativamente afectadas las menores de edad, quienes guardan en sus documentos de identidad el sexo *hombre*, por no contar con la mayoría de edad exigida por el decreto de *cambio de sexo*. En las mujeres transgénero mayores de edad se pueden ver agresiones verbales y físicas, en las que se llegan a encontrar golpes y tocamientos. En algunos casos, estas mujeres no ven la necesidad del cambio de nombre o cambio de sexo en el registro civil, por considerar que dichos cambios no determinan su condición de mujer, y en otros casos no cuentan con los recursos para el cambio de sexo en su registro civil.

5. ¿Cree usted que las mujeres transgénero deberían estar exentas de la prestación del servicio militar obligatorio, y sus correspondientes trámites ante la institución ejército? Si su respuesta es afirmativa, justifique por favor su respuesta de manera breve.

Se evidencia con la entrevista que las mujeres transgénero están de acuerdo en que no deben ser obligadas a prestar el servicio militar, ni a los trámites ante la institución ejército para su definición de situación militar, tal y como dispone la Corte Constitucional en su sentencia T 476 de 2014:

“Si una persona se reconoce como mujer transgénero, y construye su identidad en la vida pública y social como mujer transgénero, exigirle un requisito propio del género con el cual

no se identifica como es la libreta militar, desconoce su derecho a desarrollar su identidad de género, es decir, a auto determinarse”

Por tal razón, se constata la no obligatoriedad en la definición situación militar por la condición de mujer; tampoco a que se le exija de libreta militar o cambio de sexo como mecanismo necesario para acceder a otros derechos “Yo soy mujer (...) y deben respetar mis derechos como mujer, y si las mujeres no vamos a prestar servicio militar por qué me van a obligar”.

6. Teniendo en cuenta las sentencias de tutela T476 de 2014 y T-099 de 2015, caso de la señora Grace Kelly Bermúdez y caso de la señora Ginna Hoyos por multa impuesta por el ejército, ¿cree usted que se está dando cumplimiento al apartado resolutorio en casos similares? En caso de ser así, ¿conoce algún caso?

Se pudo corroborar que no se da cumplimiento a los aportes efectuados por la Corte constitucional en sus sentencias T 476/14 y T099/15, ya que según referenciaron las encuestadas, la libreta militar se sigue solicitando, y se sigue requiriendo la definición de situación militar a las mujeres transgénero, quienes no cuentan con un cambio del componente *sexo* en su registro civil donde figuran con un sexo de *hombre*, y dando como resultado la no aplicación de los aportes jurisprudenciales antes referidos. Ello trae como consecuencia que “esos papeles los sigan pidiendo”, y que al mostrar las sentencias T 476/14 Y T099/15 en medio físico, no sean tomadas en cuenta, ya que “le hacen la cara de que (...) no saben ni siquiera de lo que uno está hablando”.

7. ¿Cómo ve el panorama de los jóvenes transgeneristas que aún no cumplen la mayoría de edad y deben definir su situación militar, y en algunos casos son víctimas de batidas?

Se pudo determinar a través de las entrevistadas, que los jóvenes transgeneristas menores de edad son víctimas de batidas, prácticas en las cuales personal no calificado del ejército comete atropellos por su desconocimiento en el tema de género. Ello, aun cuando existen fallos de la Corte Constitucional, así como una interpretación normativa que deben tener en cuenta para los procesos de definición de situación militar, trayendo como consecuencia la humillación de las mujeres transgénero quienes no cuentan con un cambio del componente sexo en sus documentos, al desconocer que las mujeres transgénero son definidas por un auto reconocimiento y reconocimiento social; no necesariamente a través de sexo, así la misma figure como *hombre* en el registro civil, o cuente con un nombre masculino en su cédula de ciudadanía, guardando apariencia de mujer o una mezcla de hombre y mujer (*gender queer*). “Antes de los 18 pueden vulnerar nuestros derechos como quieran”.

8. ¿Considera usted necesaria la creación de una Ley reguladora de definición de situación militar en personas transgénero? En caso de responder afirmativamente, ¿qué apartados considera imprescindibles a tener en cuenta dentro de una Ley de este tipo?

Se pudo evidenciar la necesidad de una Ley por parte de las entrevistadas, ya que la jurisprudencia aportada por la Corte Constitucional no es suficiente para una adecuada interpretación de las autoridades militares encargadas de los procesos de definición de situación militar, quedando planteamientos anclados al término *todo varón*. Según las entrevistadas, esta Ley debe estar compuesta por personal interdisciplinario al que se integre personal LGBTI altamente calificado, quien conozca los nuevos desarrollos jurisprudenciales y necesidades de este grupo, ya que se vulnera la identidad de las mujeres transgénero al ser reconocidas sólo por el cambio de sexo en su registro civil, y no por su auto reconocimiento y reconocimiento social, aun cuando se guarda un componente de sexo hombre. De igual manera, se pudo evidenciar en las encuestadas una clara necesidad de que dicha Ley enuncie el servicio militar no obligatorio para la comunidad trans, y que las mujer trans (sean transgénero o transexual) no son receptoras de la *Ley de Reclutamiento*, ya que hasta el momento para determinar dicho planteamiento se debe recurrir a la jurisprudencia del caso Grace Kelly y Ginna Hoyos, y dos sentencias constitucionales de 2016, fruto de dos demandas contra la Ley 48 de 1993, que funcionarios del ejército no manejan y no aplican en el proceso de definición de situación militar: en un mismo sentido se ve la clara necesidad de estipulación de un servicio voluntario para personas trans, donde se encuentra el hombre trans que desea hacer parte de la institución ejército.

Fuente: elaboración propia

Anexo 12. Sentencias desarrolladas por Colombia

Sentencias

T-504/93

“En la sentencia T-594 de 1993, la Corte Constitucional amparó el derecho de una persona asignada como hombre al momento del nacimiento, que deseaba cambiar su nombre por Pamela pero cuyo cambio de registro fue negado por un notario. En este caso la Corte reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad, al considerar que era viable que un hombre se cambiará el nombre por el de una mujer y viceversa, por cuanto el nombre implica una distinción identitaria que es autónoma y personal” (Moreno, 2014, p.123).

T-314/11

“Transgenerista interpone acción de tutela contra los organizadores de un evento de música electrónica por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad, al negarle el ingreso a dicho evento debido a su identidad de género. Tanto la sentencia de primera y segunda instancia denegaron el amparo solicitado, por considerar que no existían pruebas que demuestren que se constituyó un acto discriminatorio en su contra.”

“La Corte, decide confirmar la sentencia de segunda instancia y en consecuencia advierte a la accionante que en futuro se abstenga de ejecutar conductas agresivas en establecimientos públicos, insta a la superintendencia de vigilancia, a la superintendencia de Industria y Comercio y a la Policía para que frente a la comunidad LGBTI, en establecimientos abiertos al público, se articule de forma coordinada la protección de los grupos respectivos, dentro del recíproco respeto entre ellos, al igual que hacía y desde el resto de la población. Finalmente exhorta al Ministerio del Interior y de Justicia articule con diferentes entidades del sector central una política pública integral nacional, constante y unificada con los entes territoriales para el sector LGBTI, que posibilite su socialización y coadyuve a la convivencia pacífica, cumpliendo también los deberes y obligaciones correlativas” (Articulación Regional Feminista, 2011 s.f., p. 87).

T-099/15

“Gina Hoyos Gallego, presentó acción de tutela contra la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional el 23 de julio de 2014, por considerar que la decisión de esta entidad de no expedirle la libreta militar, a menos de que pagara una multa -

como sanción a la inscripción extemporánea para definir su situación militar- vulneró sus derechos a la integridad personal, al trabajo, a la igualdad, a la libertad de conciencia, a la honra, a la dignidad humana y desconoció la prohibición constitucional contra los tratos inhumanos o denigrantes y la obligación del Estado de respetar los derechos, contenida en la CADH.

Solicitó que se le ordenara a la entidad expedir su libreta militar en el término de 48 horas, que se condenara en abstracto a dicha Dirección por el daño emergente, que se le ordenara establecer una ruta de atención especial para las personas transexuales y que se inste a la Dirección de Diversidad Sexual del Ministerio del Interior a que presente y trámite ante el Congreso de la República un proyecto de ley de identidad de género. Por su parte, el Ejército sostuvo que su actuación solo respondió a la aplicación de la normativa vigente y no a una discriminación en razón de la identidad de género de la actora. La Corte exhorta al Congreso a que promulgue una Ley de Identidad de Género, ordena al Ministro de Defensa y al Comando General de las Fuerzas Armadas que realicen un protocolo de información y campaña pedagógica con respecto a personas transexuales, y requiere a la Dirección de Reclutamiento que suspenda toda actuación con respecto a la accionante debido a que en su calidad de mujer transexual no le corresponde realizar el servicio militar obligatorio.” (Constanza & Troncozo, 2015).

T-476/14

“Iván Andrés Páez Ramírez, quien se reconoce como mujer transgénero respondiendo al nombre de Grace Kelly Bermúdez participó en un proceso de contratación con una entidad distrital en la cual se le exigió -por ser este un requisito para contratar varones-, la definición de su situación militar. Consideró la entidad que su condición de transgénero, no se encuentra dentro de las causales exentas de prestar servicio militar y por lo tanto debía cumplir con las normas. Al ver vulnerado su derecho al trabajo y al libre desarrollo de su personalidad, entre otros acudió al uso de la acción de tutela, logrando que la Corte Constitucional estableciera que “La obligación impuesta en el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, es inaplicable a las personas que han construido su identidad como mujeres transgénero, en cuanto su identidad no corresponde al concepto de “varón” contenido en la disposición referida y por lo tanto no se les puede exigir la libreta militar a las personas transgeneristas” (La voz del Derecho, 2014).

Sentencia C-879/11

“En el 2011 se presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 48 de 1993, en el cual se faculta a las autoridades militares a realizar compilaciones o

batidas. En la sentencia C-879 de 2011 la Corte declaró la exequibilidad de este artículo. Sin embargo, condicionó su aplicación a la interpretación que se haga de la expresión *compeler*. Esta Corporación estableció que quien no haya cumplido con la obligación de inscribirse para definir su situación militar “solo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe”, es decir, los ciudadanos no pueden ser retenidos por largos periodos de tiempo y conducidos a distritos militares donde les practiquen exámenes y, si resultan aptos, ser incorporados a las filas” (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2014, p. 26).

“Las autoridades militares deben respetar la jurisprudencia constitucional y en consecuencia abstenerse de efectuar detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento; es decir, que las Fuerzas Militares deben limitarse a verificar la situación militar de los ciudadanos de manera momentánea y no deben conducir a quienes no se hayan inscrito a cuarteles o distritos militares por largos periodos de tiempo con el propósito de obligarlos a inscribirse, someterlos a exámenes médicos e incorporarlos a filas si resultan aptos” (Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, 2014, p. 121).

Sentencia “C-006/16

“Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10, 14, 23, 24 y 25 de la Ley 48 de 1993 *“Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”*”

“Las ciudadanas Daniela Lucia Barros Ayazo y Geraldín José Hernández González consideran que los artículos 10, 14 (parcial), 23, 24 y 25 (parcial) de la Ley 48 de 1993 “Por medio de la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización”, vulneran los artículos 13, 16 y 25 de la Constitución Política, con base en los siguientes motivos:”

“Después de exponer lo que en su concepto debe entenderse por transexualismo y transgenerismo, las demandantes sostienen, en primer lugar, que las normas acusadas vulneran el derecho a la igualdad. Para sustentar esta acusación, citan expresamente el artículo 13 de la Constitución, y dicen que a su juicio este consagra el derecho a no ser sujeto de “distinción alguna por orientación sexual o identidad de género”. Luego se preguntan entonces “¿Por qué la legislación colombiana trata a los iguales como desiguales?, ¿Por qué exponer a estas personas [trans] a tratos desiguales como lo es imponerles el cumplimiento del servicio militar obligatorio por el simple hecho que su sexo biológico no concuerde en algunos casos con la identidad de género que la persona ha construido basándose en el libre desarrollo de la personalidad?”. En su criterio, es inconstitucional que los trans, en lo que atañe a la prestación del servicio militar, no tengan un tratamiento acorde con su identidad sexual” (Corte Constitucional, 2016).

“En segundo lugar, la acción pública hace referencia a decisiones de esta Corte en las cuales se ha reconocido a mujeres trans su “condición de mujer”, y en las que se les ha protegido su derecho a la igualdad (menciona las sentencias T-771 de 2013, T-804 de 2014 y T-562 de 2013). A partir de esa jurisprudencia, dicen las demandantes, “resulta contradictorio entonces que sea la propia ley quien desconozca su condición y omita brindarles el mismo tratamiento en su condición como mujer, tal y como se ha establecido jurisprudencialmente”. Esto además se refuerza cuando se tienen en cuenta distintos referentes de “derecho comparado sobre protección y derechos población transgénero”, con fundamento en los cuales es posible apreciar que “[a] nivel regional y en otros Estados se ha avanzado en la protección de los derechos de las personas trans a través de pronunciamientos judiciales y expediciones de leyes que permiten y facilitan a este grupo poblacional su inclusión y libre desarrollo dentro de la sociedad conforme con su condición” (Corte Constitucional, 2016).

“Las accionantes resaltan que en este caso habría una “omisión legislativa”, en los artículos 10, 14, 23, 24 y 25, toda vez que las personas tendrían que cambiar su género en el registro civil, para lo cual en Colombia deben contar con un certificado médico o diagnóstico psiquiátrico de disforia sexual que mantiene el estigma sobre la identidad de las personas trans. Mientras no exista una concordancia entre “la apariencia”, por una parte, y el género que aparece en el registro civil, se pueden configurar “incongruencias entre la ley y la realidad de la población trans, que termina imponiéndoles cargas administrativas que vulneran sus derechos y que dejan indefinido para sus casos los procedimientos y exigencias legales que deben seguir”. Señalan entonces que hay un “vacío en la legislación”, en lo que atañe a “la situación de la persona transgénero frente a la prestación del servicio militar” (Corte Constitucional, 2016).

“La Corte Constitucional constató que la demanda no cumple con todos los requisitos que se exigen para demostrar la existencia de omisión legislativa. Como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, para que se pueda abordar de fondo un cargo de inconstitucionalidad por una omisión legislativa relativa se requiere que se demuestre, entre otras cosas, una exclusión en aquellos casos que, por ser asimilables, tendrán que estar contenidos en el texto normativo cuestionado o que la exclusión carezca de una fundamentación suficiente o razonada. En el presente caso, en la demanda se desconocieron los avances jurisprudenciales sobre la materia, que reconocen expresamente, que las mujeres transgénero no son destinatarias de las normas sobre servicio militar obligatorio y que, bajo el principio de autonomía y libre desarrollo de personalidad, el auto reconocimiento es

suficiente para ser exoneradas del servicio según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 48 de 1993” (Grajales, 2016).

Anexo 13. Glosario

A

Afeminado(a): “Que, en su persona, modo de hablar, acciones o adornos se parece a las mujeres” (RAE, s.f.), se usa como adjetivo de hombre gay. Dichas acciones no determinan una preferencia sexual. Ejemplo: Hombre heterosexual que disfruta vestir como mujer.

Agénero: No se identifica con el género binario (masculino o femenino).

B

Bigénero: Persona que presenta los dos géneros binarios (masculino y femenino).

Bollera: Sinónimo de lesbiana en jerga española e hispana.

C

Cisgénero: Personas que se identifican con el género atribuido socialmente. Estas personas no se identifican como trans.

Cissexual: Persona que su sexo biológico corresponde con el género asignado. Ejemplo:

Niña con vagina= Género femenino

Niño con pene= Género Masculino.

D

Drag queen: Tránsito del género masculino al género femenino solo en algunas ocasiones. Ejemplo: Socialmente en clubs o en presentaciones, interpretando cantantes famosas como Tinna Turner o Madonna.

Drag king: Tránsito del género femenino al género masculino solo en algunas ocasiones. Ejemplo: Socialmente en clubs o en presentaciones, interpretando cantantes famosos como Antonio Aguilar o algunos personajes masculinos.

G

Gender queer: No corresponde al género masculino o al femenino, ya que constituye un tercer género no heteronormativo.

Género fluido: Que transita entre el género femenino, el masculino y el género nulo por periodos de tiempo.

H

Hombre Gay: Que siente atracción sexual por el género masculino.

Hombre Bisexual: Que siente atracción por el género femenino y el masculino.

Hombre Pansexual u Omnisexual: Que siente atracción sexual por todos los géneros.

Hombre transexual: Tránsito del género femenino al género masculino, con modificación de órgano genital y consumo de hormonas (no es muy frecuente). Esta cirugía tiene tres fines: El primero un fin morfológico, el segundo un fin funcional y por ultimo un fin sexual.

Hombre transgénero.: Tránsito del género femenino al género masculino sin modificación genital, pero si corporal con hormonas o cirugías. Ejemplo: Masculinización de tórax, cirugías de abdomen, etcétera.

I

Intersexual: Características de los dos sexos (hombre y mujer) y de ambos géneros (masculino y femenino).

Infrahumanity: Personas transexuales vistas como "no-personas, sin derecho a casarse, a trabajar, a usar un cuarto de baño público, o incluso a caminar por la calle con seguridad" (Kessler, s.f., p.311)

M

Movimiento queer: Es una tendencia de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de normalización y de exclusión internos a la cultura gay: Marginalización de las bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los trabajadores y trabajadoras sexuales (Preciado, 2000, p. 45)

Mujer Bisexual: Que siente atracción por el género femenino y masculino.

Mujer Gay o lesbiana: Que siente atracción sexual por el género femenino.

Mujer Pansexual u Omnisexual: Que siente atracción sexual por todos los géneros.

Mujer transexual: Tránsito del género masculino al género femenino, con modificación de órgano genital y consumo de hormonas. Esta cirugía tiene tres fines: El primero un fin morfológico, el segundo un fin funcional y por ultimo un fin sexual.

Mujer transgénero: Tránsito del género masculino al género femenino, sin modificación genital, pero si corporal con hormonas o cirugías. Ejemplo: Implantes mamarios y/o de glúteos.

P

Performatividad: Término creado por el filósofo John Langshaw Austin "conexión entre lenguaje y acción. Para Austin, la performatividad se da cuando en un acto del habla o de comunicación no solo se usa la palabra, sino que ésta implica forzosamente a la par una acción. La filósofa y pensadora queer Judith Butler, apoyándose en Austin, formulará la

teoría de la performatividad y con ella redefinirá este concepto a principios de los años noventa, evidenciando la importancia que tiene la performatividad en relación al género y al cuerpo. Para ello, Butler retomará también a Derrida, que a finales de los años setenta apuntó cómo los actos del habla performativos no son ejercicios libres y únicos, expresión de la voluntad individual de una persona, sino que más bien son acciones repetidas y reconocidas por la tradición o por convención social” (del Poso, Romaní & Villapalma, s.f.).

“Butler realizó una deconstrucción del género al indicar cómo el género y el cuerpo son contruidos social y culturalmente, cuestionando así los planteamientos esencialistas de la identidad. Cuando nace un bebé, decimos “es una niña”, pero no se está constatando un hecho natural y esencial, sino que se está asignando un rol cultural que hace que, desde ese momento, ese ser que acaba de nacer sea considerado una niña” (del Poso, Romaní & Villapalma, s.f.).

Protección doblemente reforzada: es la concurrencia de derechos en un sujeto.

Ejemplo: Mujer transgénero indígena con discapacidad.

T

Transexual: Depende si se identifica con el género masculino o femenino (adecuación genital tendiente al género que elija).

Transgénero: Depende si se identifica con el género masculino o femenino (hormonas y operaciones, que en el caso de estas personas, si puede incluir operación genital).

Transformista: *drag queen* o *drag king*, depende si es tránsito de género masculino a femenino o de femenino a masculino.

V

Violencia por prejuicio: “es un fenómeno social, que se dirige contra grupos sociales específicos, tales como las personas LGBT, tiene un impacto simbólico, y envía un mensaje de terror generalizado a la comunidad LGBT. De manera similar, la Comisión estima que la violencia contra las personas intersex es una forma de violencia por prejuicio contra la diversidad corporal y, específicamente, contra las personas cuyos cuerpos no concuerdan con el estándar socialmente aceptado de cuerpos femeninos y masculinos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 11).

4 Bibliografía

- AFP (2014). Corte Suprema de India reconoce la existencia de un "tercer género". Publicado en El Espectador. Recuperado de <http://www.elspectador.com/noticias/actualidad/corte-suprema-de-india-reconoce-existencia-de-un-tercer-articulo-487048>
- Albaracín, C. M. (2015). Historia de la despenalización de la homosexualidad. La despenalización de los actos homosexuales en Colombia: Un cambio legal desde arriba. Recuperado de <http://www.malbarracin.com/p/historia-de-la-despenalizacion-de-la.html>
- Arriaga R. (2012). Los límites de lo queer: la reivindicación identitaria de una persona transgénero y sus estrategias genérico-escénicas ante la parentalidad no esperada. Cuicuilco, vol. 19, núm. 54. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/351/35126359011.pdf>
- Articulación Regional Feminista. (s.f.). Observatorio de sentencias judiciales. Recuperado de <http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=1889&plcontampl=3&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4>
- Asamblea Legislativa del Distrito Federal VI Legislatura. (2015). Gaceta Federal del Distrito Federal.
- Asamblea Nacional Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia. Recuperado de: <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=4125>
- Baptiste, B. (2013). Transgenerismo. Entrevista para NatGeo.
- Bedoya, J. M. (2009). De miradas, películas y periódicos: La identidad gay en Bogotá. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Butler, J. (2004). Deshacer el género. New York: Paidós.

CIE-10 Decima revisión. (1995). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Washington.

Congreso de Chile (2013) Guía legal sobre servicio militar. 14 de junio. Recuperado de:

<http://www.bcn.cl/Leyfacil/recurso/servicio-militar>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Informe Anual de Colombia 2015. San José de Costa Rica.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2015). Violencia contra personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en América. OAS Cataloging-in-Publication Data. Washington.

Comisión Internacional de Juristas & Servicio Internacional para DDHH (2007). Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Disponible en: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf

Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y Organización de los Estados Americanos. (2013). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). México.

Congreso Constituyente de México (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de febrero de 1917. Recuperado de:

<http://www.constitution.org/cons/mexico.htm>

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 48 del 3 de marzo de 1993. D.O. 40.777. Recuperado de:

<http://www.haztemarino.mil.co/sites/default/files/Ley%2048%20de%201993.pdf>

Congreso de la República de Colombia. (2016). Ley 1780 del 2 de mayo de 2016.

Recuperado de:

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201780%20DEL%2002%20DE%20MAYO%20DE%202016.pdf>

Congreso de Chile. Guía legal sobre servicio militar. 14 de junio del 2013. Recuperado de <http://www.bcn.cl/Leyfacil/recurso/servicio-militar>

Congreso de la República de Colombia. (1987). Código Civil de Colombia.

Congreso de la República de Colombia (2013). Código Penal de Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 48. Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. Bogotá.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7 de febrero de 1917. Recuperado de <http://www.constitution.org/cons/mexico.htm>

Conway, L. (2006). De transgénero, transexualidad e intersexualidad. Recuperado de <http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/ES/TSES.html>.

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional (8 de noviembre de 1994) Sentencia No. T-504/94. [MP Alejandro Martínez]. Recuperado de: <http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/t-504-94.htm>

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala plena de la Corte Constitucional. (22 de noviembre de 2011) Sentencia C-879 de 2011. [MP Humberto Sierra]. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-879-11.htm>

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.(10 de marzo de 2015) Sentencia T-099/15. [MP Gloria Ortiz]. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-099-15.htm>

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. (9 de julio de 2014) Sentencia T-476/14. [MP Alberto Rojas]

Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-476-14.htm>

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala Plena de la Corte Constitucional (17 de febrero de 2016) Sentencia C-066/16 [MP Alejandro Linares]. Recuperado de: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-066-16.htm>

Corte Constitucional Colombiana (2011). Sentencia, T-314. Acción de tutela contra particulares. Sala Quinta de Revisión. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional Colombiana (2015) Sentencia T – 099/ 15. Orientación sexual e identidad de género. Sala Quinta de Revisión. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.

Corte Constitucional Colombiana. (1993). Sentencia C-879/11 y Sentencia T-314/11. Bogotá.

Corte Constitucional Colombiana (2016). Sentencia C-006/16. Demanda de Inconstitucionalidad. Magistrada Ponente: María Victoria Calle. Sala Plena de la Corte Constitucional.

Corte Interamericana de Derechos. (1987). Opinión Consultiva, OC-9/87.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003). Condición Jurídica y Derechos de los

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2002). Opinión Consultiva OC-17/2002.

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Recuperada de http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf

Constanza, D. & Troncozo, C. (2015). Estudio de Jurisprudencia Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales Colombia - Chile -México 2014 – 2015. Equipo Editorial
Director: Claudio Nash Rojas.

Currah, R. M. (2000). Transgender Rights. Minnesota: University of Minnesota press.

Diario digital transexual. (2012). A cinco años de la aprobación de Ley Identidad de Género en España. Recuperado de <http://www.carlaantonelli.com/notis-2702012-cinco-anos-Ley-transexuales-espana-nuestra-memoria.htm>.

Defensoría del Pueblo de la República de Colombia. (2014). Informe sobre el Servicio Militar Obligatorio en Colombia. Incorporación, reclutamiento y objeción de conciencia. Bogotá.

Defensoría del Pueblo de la República de Colombia. (2015). Voces ignoradas. La situación de personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el conflicto armado colombiano. Bogotá.

Del Pozo, D.; Romani, M. & Villapalma, V. (s.f.). Abecedario anagramático. Performatividad. Recuperado de <http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/performatividad>

DSM-IV, C. E. (1995). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV. Recuperado de <http://www.mdp.edu.ar/psicologia/cendoc/archivos/Dsm-IV.Castellano.1995.pdf>.

EFE (2014). Australia reconoce el ‘tercer sexo’. Publicado en Revista Semana. Disponible en: <http://www.semana.com/imprimir/382392>

Ejército Nacional de Colombia (2016). Escuelas de formación. Recuperado de <https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=253783>

Ejército Nacional-Jefatura de reclutamiento (s.f.). Guía Proceso de Definición de la Situación Militar. Recuperado de: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi83sbiiMvNAhUF5CYKHYPpA3YQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ejercito.mil.co%2F%3Fidcategoria%3D384213%26download%3DY&usg=AFQjCNFJ>

FPtzxC4D3XULbL6a5OoiK03XpQ&sig2=6mXn5VmaPHQfG3KfzmHLFA&cad=rj

a

El Grupo de Derecho Interés Público (GDIP) &Dejusticia (2014). Expediente T- 4.541.143.

Acción de tutela presentada por Sara Valentina López Jiménez contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Fundación Reflejos de Venezuela. (2014). Recuperado de

<http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/noticia/2869/Asociacioacuten-Profesional-Mundial-para-la-Salu.html>.

García, F. V. (2009). Del sexo dicotómico al sexo cromático: La subjetividad transgenerica y los límites del Constructivismo. Sexualidad, Salud y Sociedad d- Revista Latinoamericana, p. 75.

Garosi, E. (2012). "Hacer" lo Trans. Estrategias y procesos de transición de género. Túrín: Guicuilco.

GayStarNews (2013). En los Países Bajos, las personas trans, ya no serán esterilizadas

forzosamente. Portal virtual: No más Homofobia. Disponible en:

<http://www.nomashomofobia.net/2013/12/18/en-los-paises-bajos-las-personas-trans-ya-no-seran-esterilizadas-forzosamente/>

Grajales, V. (2016). Cuadro de sentencias de constitucionalidad emitidas por la Corte

Constitucional Colombiana en lo corrido de 2016. Bogotá. Disponible en

<https://valenciagrajalesabogados.blogspot.com.co/2016/05/cuadro-de-sentencias-de.html>

Humanas Colombia. (s.f.). Instrumentos. Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Recuperado de

http://www.humanas.org.co/pagina.php?p_a=40

Huertas, M. F. (2013). El derecho judicial de la población LGBTI y de la familia diversa.

Bogotá: Universidad del Rosario.

Intervención ciudadana de Colombia Diversa, la coalición de organizaciones transgénero del

Aquelarre, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), el

Grupo de Derecho Interés Público (GDIP), y Dejusticia. (2014). Expediente T-

4.541.143. Acción de tutela presentada por Sara Valentina López Jiménez contra la

Registraduría Nacional del Estado Civil.

Kessler, W. M. (s.f.). Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de

http://www.pueg.unam.mx/images/seminarios2015_1/identidad/u_4/kes_mck.pdf.

La voz del Derecho (2014). Jurisprudencia: Sentencia T-476/14. Libreta militar no es exigible

a las mujeres transgénero. Jurisprudencia. Disponible en

[http://www.lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/2662-jurisprudencia-sentencia-](http://www.lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/2662-jurisprudencia-sentencia-t-476-14-libreta-militar-no-es-exigible-a-las-mujeres-transgenero#sthash.dfyg2UqZ.bEqy4XeT.dpuf)

[t-476-14-libreta-militar-no-es-exigible-a-las-mujeres-](http://www.lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/2662-jurisprudencia-sentencia-t-476-14-libreta-militar-no-es-exigible-a-las-mujeres-transgenero#sthash.dfyg2UqZ.bEqy4XeT.dpuf)

[transgenero#sthash.dfyg2UqZ.bEqy4XeT.dpuf](http://www.lavozdelderecho.com/index.php/docu/item/2662-jurisprudencia-sentencia-t-476-14-libreta-militar-no-es-exigible-a-las-mujeres-transgenero#sthash.dfyg2UqZ.bEqy4XeT.dpuf)

Las Cortes Generales. (2007). Agencia estatal boletín oficial del Estado español. Recuperado

de <http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf>.

León M. (s.f.) La comunidad LGBTI se 'arruncha' con el Procurador. Diario El Tiempo.

Recuperado de: [http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/comunidad-lgbti-](http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/comunidad-lgbti-protesta-frente-a-la-procuraduria/16416448)

[protesta-frente-a-la-procuraduria/16416448](http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/bogota4/comunidad-lgbti-protesta-frente-a-la-procuraduria/16416448)

Ministerio de Justicia y del Derecho (2015). Decreto 1227 del 4 de junio de 2015. Disponible

en:

[https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decret](https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf)

[os/1.%20DECRETO%202015-1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf](https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/decreto%20unico/%23%20decretos/1.%20DECRETO%202015-1227%20sexo%20c%C3%A9dula.pdf)

Mora, M. A. (2013). La historia del movimiento homosexual colombiano. Entrevista.

- Moreno D. (2014). Derecho, persona e identidad sexual. El debate jurídico de la documentación de las personas trans. Univ. Estud. Bogotá (Colombia) N° 11: 123-143.
- Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). (2015). Recuperado de <http://www.movilh.cl/fueza-trans-de-reune-con-el-gobierno-para-el-avance-de-la-Ley-de-identidad-de-genero/#more-18573>.
- Nahir, S. M. (2013). La teoría Queer y las narrativas progresistas de identidad. Revista de estudios de género. La ventana.
- OEA (1994). Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "convención de belem do para". Tratados multilaterales. Disponible en: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>
- ONU (1950). Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. [Roma, 4 de noviembre]. BOE número 243. Recuperado de <http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/>
- ONU (1976). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Derechos Humanos. [23 de diciembre]. Disponible en <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>
- Ortiz, R. A. (2012). Los límites de lo Queer: La reivindicación identitaria de una persona Transgénero y sus estrategias genérico-escénicas ante la parentalidad no esperada. Cuicuilco.
- Patiño, E. (2001, 25 de noviembre). El Tiempo. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-693678>.
- Preciado, B. (2014) Historia de una palabra: Queer. Recuperado de <http://paroledequeer.blogspot.com.co/p/beatriz-preciado.html>

- Preciado, B. (2010). VolunteerSimplicity. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VtIKD7DOomA>.
- Presidencia de la República (1995). Decreto 2150. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario Oficial No. 42.137
- Principios de Yogacarta - Sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. (2007). Recuperado de http://www.yogakartaprinciples.org/principles_sp.pdf.
- Quinche M. & Peña. R. (2013). El derecho Judicial de Población LGBTI y la familia diversa. Legis: Bogotá.
- RAE (s.f.). Afeminado. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=0wtotJy>
- Revista Semana (2015). La otra causa del procurador contra los transexuales. Sección Nación. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/procurador-contra-el-cambio-de-sexo-en-la-cedula-de-los-gais/446736-3>
- Revista Semana. (2014). Australia reconoce el ‘tercer sexo’. Vida Moderna. [Edición digital]. Disponible en <http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/genero-sexual-neutro-ahora-en-australia/382392-3>
- Rojas, G. (2014). India reconoce a los transexuales como un “tercer género”. Diario El País. (Edición Virtual). Recuperado de http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/15/actualidad/1397557465_686896.html
- Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, de México. Formas de cumplir con el Servicio Nacional Militar (SMN). Recuperado de <http://transparencia.sedena.gob.mx/servicio-militar-nacional/formas-de-cumplir-con-el-smn.html>

Secretaría de Integración Social, Subdirección para asuntos LGBTI. (2015). Vive tus

Derechos Vive la Diversidad. Portfolio de servicios de la Subdirección LGBT.

SEDENA de México (s.f.) Formas de cumplir con el Servicio Nacional Militar (SMN).

Recuperado de <http://transparencia.sedena.gob.mx/servicio-militar-nacional/formas-de-cumplir-con-el-smn.html>

Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. (2012). Ley 26.743: Derecho a la

identidad de género de las personas. Recuperado de

<http://www1.hcdn.gov.ar/BO/boletin12/2012-05/BO24-05-2012leg.pdf>

Sistema de Naciones Unidas de Panamá. (2010). Convención sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). Protocolo facultativo de la

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer. Disponible en https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf

Stryker, S. (2008). The difficult decades. En S. Stryker. Transgender History. Berkeley: Seal studies.

Treceño, J. (2016, 17 de marzo). La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de transexualidad

con la abstención del PP. El Mundo. Recuperado de

<http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/17/56eaa52a46163fa31d8b45c9.html>

UNICEF Comité Español. (1989). Convención Sobre los Derechos del Niño. Recuperado

de <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>